

# Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública

---

## Crimen organizado y feudalización del poder en el mundo contemporáneo

Documento de trabajo núm. 324

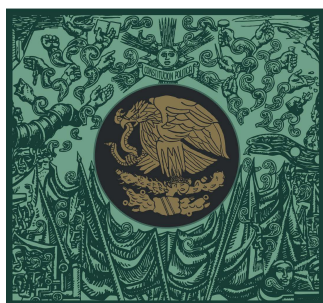


Marzo 2020

---

[www.diputados.gob.mx/cesop](http://www.diputados.gob.mx/cesop)

---



**CÁMARA DE  
DIPUTADOS**  
LXIV LEGISLATURA

---

**CESOP**

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública

---

Información que fortalece el quehacer legislativo



**CÁMARA DE  
DIPUTADOS**  
LXIV LEGISLATURA



## Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública

*Organización Interna*

Netzahualcóyotl Vázquez Vargas

Director de Estudios Sociales encargado del despacho de la Dirección General del CESOP

Enrique Esquivel Fernández  
Asesor General

Ricardo Martínez Rojas Rustrian  
Director de Estudios de Desarrollo Regional

Ernesto R. Cavero Pérez  
Subdirector de Estudios de Opinión Pública

José Francisco Vázquez Flores  
Subdirector de Análisis y Procesamiento de Datos

Katia Berenice Burguete Zúñiga  
Coordinadora Técnico

Investigadores

Gabriel Fernández Espejel  
José de Jesús González Rodríguez  
Roberto Candelas Ramírez  
Salvador Moreno Pérez  
Felipe de Alba Murrieta  
Rafael del Olmo González

Apoyo en Investigación

Luis Ángel Bellota  
Natalia Hernández Guerrero  
Karen Nallely Tenorio Colón  
Ma. Guadalupe S. Morales Núñez  
Nora Iliana León Rebollo  
Ricardo Ruiz Flores

Alejandro Abascal Nieto  
Abigail Espinosa Waldo  
Elizabeth Cabrera Robles  
Guillermina Blas Damián

Alejandro López Morcillo  
Editor

José Olalde Montes de Oca  
Asistente Editorial

Información que fortalece  
el quehacer legislativo

**CESOP**

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública

# **Crimen organizado y feudalización del poder en el mundo contemporáneo**

Luis Angel Bellota\*

## **Introducción**

El presente documento se sirve de los debates en torno al concepto de *refeudalización* en el mundo contemporáneo, sobre todo al interior de la sociología prospectiva.<sup>1</sup> Primero se hará un recuento de los autores que se valen del término y luego se hará un recorrido en la historia reciente de los países latinoamericanos para explicar mejor la fragmentación –o relativa fortaleza– del poder formalmente establecido; por último, en el tercer apartado abordaremos, a vuelo de pájaro, la utilidad de la antedicha categoría en el contexto de la crisis de seguridad pública en México. No se tratarán los múltiples porqués de este fenómeno –que, en sí mismo, es un tema muy vasto y ampliamente recorrido en tanto en los claustros académicos como en el periodismo– pero sí se ofrece una herramienta conceptual que, a *contrario sensu* de la clásica definición weberiana sobre el monopolio legítimo de la violencia, plantea una feudalización del poder dado el quebranto paulatino de las condiciones que permiten a los Estados ser los únicos facultados para ejercer acciones coercitivas. La idea de feudalidad a la que apelamos en las siguientes páginas se aleja de su acepción más conocida –aquella que asocia el poder con la tenencia de la tierra y el vasallaje de campesinos– y se refiere a la aparición de nuevos sujetos sociales a los que el Estado no puede doblegar o bien se beneficia de ellos.

---

\* Licenciado en Historia por la Universidad Iberoamericana y pasante de la maestría en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Investigador del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Correo electrónico de contacto: [cuebellota@hotmail.com](mailto:cuebellota@hotmail.com).

<sup>1</sup> Entiéndase la sociología prospectiva como la rama de dicha ciencia social que se dedica al estudio predictivo de los patrones sociales, las posibles repercusiones del cambio tecnológico y el desarrollo de nuevas tendencias en las sociedades –como los hábitos de consumo, la racionalidad de los actores económicos o los escenarios internacionales–. Es una herramienta de análisis que sirve para diseñar las políticas públicas, planificar el gasto público y dirigirlo hacia los rubros donde se requiera un incremento predecible del mismo, orientar la toma de decisiones y pronosticar situaciones críticas o potenciales problemas.

El debilitamiento de los mecanismos fiscalizadores y de control de los gobiernos es observable, por ejemplo, en el desacoplamiento entre el actual modelo de globalización –que borra las fronteras físicas y las regulaciones a las que antiguamente podían estar sujetos los actores económicos– y la naturaleza estatal del derecho público. La normalización de lo privado sobre lo público es cuantificable en los fallos, arbitrajes, tratados, acuerdos mercantiles y demás facilidades jurídicas que tienden a favorecer intereses financieros y empresariales.<sup>2</sup> Así como es palmaria la influencia de los gigantes corporativos en la elaboración de leyes, contratos y reglas de origen por medio del *lobbying* –generando así canales exclusivos de representación política–, la relativización del poder estatal como garante del orden y los bienes públicos en vastas regiones del planeta también se mide en la impotencia de sus acciones, o en el peor de los casos en la nulidad de su presencia ante el desafío del narcotráfico y, en general, de los mercados delictivos y sus promotores.

El crecimiento de zonas libres de legalidad, donde su violación es parte de su cotidianidad, ha facilitado el crecimiento de legitimidades paralelas a las oficiales. La expansión del crimen organizado, en paralelo a la globalización de los mercados, en sus versiones más extremas, como en Rusia, Albania, Colombia o México, por citar algunos casos, conlleva el desdibujamiento del Estado de derecho, la aparición de nuevos poderes soberanos capaces de decidir sobre la vida de los ciudadanos que habitan en sus zonas de influencia y la cooptación de comunidades que directa o indirectamente se integran al abanico de actividades ilícitas que alimentan las finanzas y el poderío corruptor de las estructuras delictivas. Los escenarios de compleja solución que proyectan los impactos globales y locales por el cambio climático, el aumento de la migración como uno de los grandes acontecimientos que promete el siglo XXI y la competencia entre regiones y países por los menguantes recursos naturales pueden crear una ingobernabilidad inédita que despliegue y compruebe el dominio paralegal que ya detentan las organizaciones criminales. De no cumplirse los compromisos de la agenda 2030, si las condiciones globales empeoran de forma acelerada, es plausible que la feudalización del poder –y no sólo la corporativización económica del mismo– sea una de sus características más acentuadas conforme se fracturen territorios y soberanías. Este ensayo ofrece una somera explicación de la

---

<sup>2</sup> Juan Hernández Zubizarreta, “Un nuevo feudalismo global”, en *América Latina en Movimiento*, 4 de noviembre de 2015, en <https://www.alainet.org/es/articulo/173407>

fragmentación del poder formal ante el surgimiento de entidades no legales que riñen por el control de territorios, poblaciones y recursos en el mundo contemporáneo.

### ¿Refeudalización del poder?

Hace más de 40 años un grupo de académicos italianos provenientes de distintas disciplinas, hablamos de Umberto Eco, Furio Colombo, Francesco Alberoni y Giuseppe Sacco, sugirió que el uso progresivo de la violencia privada, la disolución de los vínculos sociales, la deslocalización de los polos económicos y los síntomas de ingobernabilidad en el mundo perfilaban “una nueva Edad Media”. Despojada de todo sentido peyorativo que distorsiona el significado epocal del término convirtiéndolo en sinónimo de atraso y oscurantismo, los autores en cuestión retomaron las ideas de Roberto Vacca, un compatriota y erudito del que son contemporáneos. Tómese en cuenta que el uso del concepto “feudalización”, tal como lo utilizaron los estudiosos recién nombrados, así como el sociólogo argentino Juan Carlos Rubinstein es para hacer una analogía entre el presente y el Medievo y no una lectura equivocada de la historia –pues sabemos que los mismos hechos son irrepetibles–. Para clarificar mejor el significado de “refeudalización”, Rubinstein sostiene que:

[...] en función de algunas semejanzas en la configuración de determinadas “estructuras” es posible, para facilitar la tarea de comprender el fluir histórico, apelar a esas similitudes conceptuales, de modo tal que, hoy, podamos hablar de sociedades estamentales o de procesos de (re)feudalización, sin que, en rigor, constituyan el fenómeno medieval y el actual, la misma cosa. Porque de lo que se trata es de captar ese fluir histórico que se realiza en un tiempo que no es pasado, sino “presente de las cosas pasadas”, lo cual valida nuestro paralelismo.<sup>3</sup>

En su texto *The Coming Dark Age*, Vacca deja volar su imaginación sociológica y, rayando en los límites de la ciencia ficción, plantea los riesgos que amenazan la viabilidad de las sociedades actuales –predominantemente urbanizadas, con sobrepoblación y dependientes de la tecnología en casi todos los ámbitos de la vida–. Para él, tarde o temprano la creciente demanda de servicios que significan las necesidades humanas no podrían ser cubiertas y, a cuenta del caos que esta situación desencadenaría, bandas al margen de la ley podrían suplir las funciones del Estado. Pensando en la Unión Americana, el mencionado escritor estimaba que la anarquía imperante en

---

<sup>3</sup> Juan Carlos Rubinstein, *Crisis de la sociedad civil. Neofeudalización y posfordismo*, Madrid, Trama editorial, 2002, p. 12.

las calles sería propicia para la aparición de agrupaciones civiles, algunas de tendencia extremista, que retomarían el control de la situación a punta de pistola.<sup>4</sup> En caso de que sobreviniese una ruptura del orden social, sea por el colapso de los servicios públicos, por la carencia de agua o por el encarecimiento de los alimentos, las autoridades quedarían rebasadas. En su hipótesis, Vacca se aventuró a presagiar –fallidamente, por cierto– que entre 1985 y 1995 iba a tener lugar una crisis sistémica en Estados Unidos o Japón.<sup>5</sup> Si bien ocurrieron otros acontecimientos geopolíticos de enorme relevancia, como el derrumbe de la Unión Soviética y el ascenso global de China, los posibles escenarios que preanunciarían el comienzo de una nueva Edad Media nos obligan a reflexionar sobre la insostenibilidad del *modus vivendi* que caracteriza a las sociedades de consumo. El derroche de energía, la contaminación medioambiental que dejan a su paso las grandes industrias o las pujas por el vital líquido en las zonas metropolitanas, son algunos ejemplos de los problemas que legó el siglo XX y para los cuales no existen soluciones sencillas o de bajo costo.

Las perspectivas del futurólogo italiano coinciden con el informe *Los límites del crecimiento* (1972). De hecho, Vacca se inspira en él y, con un dejo de alarmismo distópico, exagera las advertencias neomalthusianas sobre la crisis ecológica y el gradual déficit de recursos que señalaba el citado estudio patrocinado por el Club de Roma.<sup>6</sup> La tesis de Vacca es cuestionable y provocadora a la vez; cuestionable porque tiende a la exageración y provocadora porque desarrolla argumentos que la hacen verosímil. La visión de futuro que él plantea es digna de repensarse a la luz de los devastadores efectos que ya anuncia el cambio climático. Tan sólo consideremos las oleadas migratorias que estarán asociadas a dicho fenómeno.

El libro de Vacca motivó a Eco para plantearse la posibilidad de un retroceso civilizatorio, ya que los sistemas y subsistemas sobre los cuales está organizado el mundo actual corren el peligro de encontrar un límite, desplomarse por sus propias contradicciones o no responder a los

---

<sup>4</sup> En ese sentido, el análisis de Vacca no es descabellado. Dado el circulante de armas y la relativa facilidad para adquirirlas, desde hace más de cuatro décadas el gobierno norteamericano tiene razones para preocuparse si aumentan las tensiones sociales, raciales o políticas; si éstas escalan podrían derivar en pequeños conflictos civiles o por lo menos en una coyuntura que amerite el despliegue de la Guardia Nacional de Estados Unidos. La presencia de milicias civiles en las zonas rurales del país vecino, así como el activismo de organizaciones que defienden a ultranza la tenencia de armas automáticas, no es un fenómeno reciente. La mayoría de quienes sostienen la inalterabilidad de la segunda enmienda son conservadores que, naturalmente, desconfían de las disposiciones estatales; en su versión más extrema, algunos promotores de este derecho amparado por la Constitución pertenecen a grupos de odio de ideas supremacistas.

<sup>5</sup> Roberto Vacca, *The Coming Dark Age*, Londres, Panther, 1974, p. 137.

<sup>6</sup> *Ibid.*, pp. 48-50.

retos y las necesidades de una sociedad cada vez más compleja y sobrepoblada. Las soluciones híper especializadas para los problemas que se presentan de forma contingente, la diversidad de necesidades en sociedades tan abigarradas como cambiantes y la interdependencia económica, financiera y tecnológica entre regiones, hacen cada vez más difícil que una sola autoridad centralice y gestione eficazmente un aparato administrativo que sea capaz de responder a toda esa complejidad.<sup>7</sup>

Tanto Vacca como Eco y los intelectuales arriba mencionados, al hablar de una nueva Edad Media, se referían a la existencia de una etapa transitoria o interregno entre dos periodos. En cierto modo *aggiornaban* el sentido que los renacentistas le habían asignado al Medioevo,<sup>8</sup> sólo que sin el “aura negativa” que lo asociaba al pensamiento escatológico, las creencias milenaristas o la intolerancia religiosa. Si la primera Edad Media fue el largo acontecer de mil años que separa a la Antigüedad clásica de las eras moderna y contemporánea, la segunda es el puente entre esta última y la consolidación de un futuro más estable después de los desajustes globales que todos ellos ven altamente factibles de que sucedan. En la década de los setenta las visiones menos amables del porvenir se relacionaban con el mundo que surgiría después de las crisis económicas, el aumento estrepitoso de los energéticos y el estallido de guerras por doquier. El fin del conflicto Este-Oeste con un apocalipsis nuclear pendía como la principal amenaza sobre la humanidad.

El futuro poco alentador que se pensaba hace más de cuarenta años ha sido sustituido por otros temores, pero la idea de una nueva Edad Media siguió siendo motivo de discusión entre las filas de la sociología prospectiva y los expertos en geopolítica. Al persistente peligro de un ataque nuclear o de una pandemia que diezme amplias franjas de la población se suman el calentamiento global y todos los problemas que de él se desprenden. José David Sacristán de Lama lo dice en un tono mucho más sombrío:

[...] desde ahora y en los próximos decenios sufriremos un deterioro parecido al que sufrieron en el siglo V los habitantes del Imperio romano y que marcó la vida de sus descendientes durante varias centurias. El siglo XXI será nuestro siglo V. Queda la duda sobre el margen que tenemos para que el proceso no se descontrole del todo y moderar el alcance de la crisis.

---

<sup>7</sup> Umberto Eco, “La Edad Media ha comenzado ya”, en *La nueva Edad Media*, Madrid, Alianza editorial, 1974, p. 9.

<sup>8</sup> A mediados del siglo XVI el pintor Giorgio Vasari publicó un texto en el que explicaba su propia época desde su postura como artista. En él explica el surgimiento del periodo renacentista y al “comparar la gloria de la antigüedad con los logros del presente y del pasado reciente de Italia, llamó ‘Edad Media’ al oscuro periodo que separaba ambas épocas. Y el uso de este término también arraigó”. Paul Johnson, *El Renacimiento*, México, Debolsillo, 2015, p. 16.

Nuestro mundo no tiene una estructura centralizada como la del Imperio romano, pero el mantenimiento de nuestro sistema de vida está supeditado igualmente al funcionamiento coordinado de un complejo engranaje de piezas interdependientes.<sup>9</sup>

El argumento axial de Sacristán enfatiza la irrefrenable hambre energética que aceleró la globalización y sus severos impactos en el medio ambiente. Las presiones demográficas, la consolidación más o menos reciente de nuevas potencias económicas que requieren sostenidamente fuentes de energía, la finitud de recursos y la competencia por ellos, plantean un escenario mundial por demás convulso en el que gobiernos y corporaciones, juntos o por separado, buscarán la forma de acceder y apropiarse de las materias primas y los bienes considerados estratégicos.<sup>10</sup> La diplomacia, tal como la entendemos desde la fundación de Naciones Unidas, basada en acuerdos y apegada al derecho, “cederá cada vez más espacios a la lucha por la supervivencia y a los métodos más burdos de la imposición y el chantaje”.<sup>11</sup> Este análisis tiene un aire de familia con el de Hedley Bull y Jacques Attali.

Casi por los mismos años en los que Eco teorizaba sobre los paralelismos entre esta época y el Medioevo, Bull percibía los primeros síntomas de obsolescencia en las reglas y procedimientos que sostenían la arquitectura internacional de la segunda posguerra. Este internacionalista registró los primeros visos de separatismo y fragmentación en muchos países; adelantándose varios años a su presente, previó escenarios que actualmente tienen una mayor plausibilidad de cumplirse en las próximas décadas. Sin embargo, para el tema que nos ocupa, Bull estableció que la restauración de la violencia privada en el ámbito global “puede ser interpretada como un signo del declive del sistema de estados y de su transformación en una reencarnación laica del orden medieval”.<sup>12</sup> Para ser más precisos, él también utilizó el término “nuevo medievalismo”.<sup>13</sup> La monopolización del uso de la fuerza debe ser ejercida por una autoridad legítimamente constituida; este corolario, tantas veces repetido, ha sido la doctrina jurídica más aceptada para contener las pulsiones anárquicas al interior de una sociedad, pero también para regular las relaciones entre Estados. En los hechos no siempre es así. La aparición de grupos no estatales que se sirven de la violencia cuestiona dicho presupuesto.<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup> José David Sacristán de Lama, *La próxima Edad Media*, Barcelona, Ediciones Bellaterra, 2008, p. 107.

<sup>10</sup> *Ibid.*, pp. 108-113.

<sup>11</sup> *Ibid.*, p. 120.

<sup>12</sup> Hedley Bull, *La sociedad anárquica*, Madrid, Catarata, 2005, p. 318.

<sup>13</sup> *Ibid.*, p. 315.

<sup>14</sup> *Ibid.*, p. 320.



La proliferación de células terroristas de diversa orientación y la creciente toma de decisiones a manos de multinacionales –por encima o a escondidas de las instancias oficiales–, por un lado, atomizan la violencia y, por el otro, desvanecen la autoridad soberana de los gobiernos. Bull falleció tempranamente y no pudo comprobar que sus estimaciones, al cabo de cuatro décadas, serían superadas por la realidad. El auge del terrorismo, el enrolamiento voluntario de adeptos en Medio Oriente y Asia Central –desde las guerrillas talibanes hasta el Estado Islámico–, la expansión de organizaciones criminales que han explotado las ventajas de la globalización económica o el financiamiento ilegal que desde hace décadas cometen las corporaciones petroleras y mineras para atizar conflictos civiles en África central o para financiar gobiernos corruptos que facilitan la extracción de materias primas,<sup>15</sup> le dan la razón a este teórico de las relaciones internacionales.

En su trayectoria como polígrafo Attali nos brinda un panorama similar, el cual proyecta hasta la segunda mitad del presente siglo. El desmoronamiento de las soberanías estatales, la competencia por los recursos y el aumento de la violencia no legítima entre gobiernos y particulares, a futuro, desembocará en lo que él llama “hiperconflicto”. Antes de 2025, “con el advenimiento progresivo de un orden policéntrico, habrán surgido nuevas potencias regionales, todas ellas deseosas de tener acceso a las mismas riquezas”.<sup>16</sup> Los conflictos potenciales que se desprendan por la competencia entre Estados, primero en el campo económico y luego en el diplomático, podrían “desencadenar enfrentamientos militares en los que acabarán interviniendo fuerzas muy antiguas, piratas y mercenarios”.<sup>17</sup>

La presencia de piratas en aguas internacionales, como en el océano Índico, y el empoderamiento de mafias bien organizadas que mueven millones de dólares al año, hacen que el ejercicio imaginativo de Attali no resulte nada inverosímil. Ambos son producto de los vacíos de poder que dejan los Estados cuando claudican en el cumplimiento de sus obligaciones –

---

<sup>15</sup> Uno de los sitios en los que compañías transnacionales han participado y alentado la existencia de un mercado negro es Nigeria. Desde hace un cuarto de siglo, la corrupción rampante en las esferas más altas del gobierno incentiva que miembros del ejército, guerrillas y bandas criminales perforan los oleoductos, extraigan el oro negro, lo almacenen en buque tanques y posteriormente logren venderlo en el mercado internacional. Los conflictos armados y el pillaje de petróleo en el Delta del Níger, además de una perenne inestabilidad, dejan al descubierto la complicidad de las empresas petroleras que compran y refinan el combustible robado, por no hablar de los banqueros que se prestan a facilitar dichas operaciones. La Royal Dutch Shell fue sentenciada por un tribunal de Nueva York por su cooperación en la persecución, tortura y ejecución de activistas y defensores del medio ambiente en Nigeria. *Resistencia. Boletín de la Red Oilwatch*, núm. 26, marzo 2002, pp. 2-4.

<sup>16</sup> Jacques Attali, *Breve historia del futuro*, Barcelona, Paidós, 2007, p. 189.

<sup>17</sup> *Ibid.*, p. 192.

principalmente la seguridad— o bien cuando una sociedad experimenta un periodo transicional marcado por cambios acelerados sin las instituciones y los cuerpos técnicos más adecuados para administrar esas transformaciones, minimizar los riesgos o adaptarse a las nuevas circunstancias. Por ejemplo: la implantación de un nuevo régimen político, el ajuste estructural de la economía o la reconstrucción de un territorio después de un conflicto intestino. Eso ocurrió en más de un país africano en las décadas siguientes a la descolonización<sup>18</sup> o en Rusia y Europa del Este después de 1991.<sup>19</sup> Entre los escombros del comunismo y la implantación de reformas económico-financieras para las cuales no estaban preparados tanto la población como los gobiernos que las impulsaron, surgieron nuevas elites que aprovecharon la coyuntura para asegurarse influencia política y acaparar las mejores oportunidades económicas.<sup>20</sup>

Los países de la antigua ex Yugoslavia, junto con Albania y Bulgaria, ilustran el nacimiento de estas elites que mimetizan los negocios ilícitos con las decisiones de gobierno. La autoridad real no pasa necesariamente por los funcionarios que ejercen un cargo sino, más bien, por los poderes facticos que hicieron fortuna con el paso de una economía cerrada a otra abierta. Las mafias comparten sus ganancias y las funciones gubernamentales con la clase política postcomunista. Una vez concluidas las guerras étnicas que devastaron los Balcanes, los paramilitares que participaron en ellas “se dedicaron a jornada completa a traficar con heroína,

---

<sup>18</sup> Esta situación, en algunos casos, facilitó el surgimiento de Estados fallidos: territorios que suponen una amenaza a la comunidad internacional a cuenta de la inseguridad permanente y la expulsión de grupos humanos que no hallan ninguna posibilidad de vida en sus lugares de origen por la destrucción de total de la economía, la carencia de los servicios más básicos o la presencia de gavillas delictivas, ejércitos tribales u organizaciones terroristas que no permiten el asentamiento de un marco jurídico que permita vivir en paz a sus habitantes.

Cabe añadir que “no todos los Estados fallidos son iguales. Algunos se han caracterizado por provenir de etapas de colonización mal digeridas. Otros han surgido a partir de incipientes Estados postcoloniales con una fuerte presencia en la sociedad. Fuerte, sí. Pero también desordenada, sectaria y/o despótica. Incluso en términos de (la ausencia de) respeto a los derechos humanos más elementales. Estados que, las más de las veces, ha sido cuerpos extraños a esas mismas sociedades a las que en teoría estaban llamados a servir. Este fenómeno es muy característico del África subsahariana, aunque no sea exclusivo de esa área geográfica”. Josep Baqués Quesada, “Los grupos armados sub-estatales como fuente de inestabilidad: warlords, jefes de clan, milicias”, en *Cuadernos de estrategia*, núm. 152, junio 2011, p. 112.

<sup>19</sup> “Cuando la Unión Soviética se derrumbó y la economía de los Estados que nacieron de ella entró en barrena, para la gran mayoría de sus habitantes el futuro se presentaba tétrico e incierto. Si el capitalismo gansteril parecía temible en Moscú, peores eran las perspectivas para quienes vivían en territorios periféricos, especialmente en el Cáucaso, donde las guerras, los conflictos civiles y el hampa revestían de peligro actividades tan cotidianas como salir a la calle a hacer las compras”. Misha Glenny, *McMafia. El crimen sin fronteras*, Buenos Aires, Imago Mundi, 2008, p. 135.

<sup>20</sup> En una revelación hecha por el ex ministro del Interior, Anatoli Kulikov, hacia mediados de 1997 “el 58% del comercio de productos para el consumo y los servicios en Rusia es controlado por grupos mafiosos, coludidos con funcionarios corruptos; asimismo, casi 40% del producto interno bruto del país correspondió a la economía subterránea [...]. Kulikov [...] advirtió que los delitos económicos y la guerra entre los mafiosos constituyen una amenaza para la seguridad de Rusia, donde existen unos 8 mil grupos criminales que dominan la economía [...]”. *La Jornada*, 5 de abril de 1997, p. 55.

tabaco, mujeres e inmigrantes ilegales destinados a Europa occidental”. Macedonia también es un ejemplo de lo que pasa cuando un gobierno es cercado por el ascendente del crimen organizado; en vísperas del fin del milenio, la pequeña nación montañosa estuvo “a punto de sumirse en una guerra civil provocada casi exclusivamente por el control de las rutas de contrabando del tabaco”.<sup>21</sup>

Otro hecho que ejemplifica la privatización de la violencia, recordando a los *condottieri* de las ciudades-Estado italianas de los siglos XV y XVI, es la “gansterización” de la economía en el trance de la URSS a Federación Rusa. En un trabajo que combina la crónica con la investigación periodística, Misha Glenny describe mecanismos medievalizados para dirimir querellas mercantiles o garantizarse seguridad física ante la ineficacia y la corrupción policiaca; el más común era el pago de protección para que la competencia no atentara contra el empresario que deseaba mantenerse en el mercado.<sup>22</sup> He aquí un buen ejemplo de refeudalización.

Regresando a las predicciones de Attali, conforme los gobiernos se vean imposibilitados de garantizar la legalidad, el dominio territorial o la recaudación fiscal dentro de su soberanía, no sería difícil que estos actores que viven al margen de la ley en distintas latitudes asuman el control de poblaciones enteras y participen de forma menos discreta en el mercado internacional como un agente económico más. De facto ya ocurre así. En décadas recientes hemos atestiguado el ascenso y la caída de gobiernos hegemonizados por la criminalidad. Las mafias disponen de enormes sumas de dinero para corromper jueces, cooptar funcionarios e infiltrar fuerzas de

---

<sup>21</sup> Glenny, *op. cit.*, p. 56.

<sup>22</sup> “En 1988 el líder soviético Mijail Gorbachov aprobó la Ley sobre Cooperativas, en virtud de la cual fue legal por primera vez en Rusia desde hacía sesenta años que personas como [Artyom] Tarasov fundasen una compañía. Los empresarios descubrieron que, en cuanto tenían en marcha un negocio que daba dinero, los beneficios atraían competencia. ‘Y los rivales empleaban cualquier método para meterse en el mercado –explica este empresario–. Acudir a la policía en busca de protección era fútil. Como demuestra la franqueza del general [Vladimir] Rushaylo al hablar con Tasarov, era como si la policía –que tradicionalmente era la primera línea de la autoridad en Rusia– hubiese dejado de existir. Carecían de los recursos intelectuales y económicos para adaptarse al advenimiento del capitalismo. De esta forma el Estado empezó a ceder [...] su monopolio de la violencia a los [...] *gruppirovki* o bandas callejeras. Lejos de ser el heraldo de la anarquía, estos grupos (compuestos por veteranos de Afganistán, tipos duros de la calle, expertos en artes marciales, antiguos agentes del KGB, todos ellos personajes terroríficos) fueron las comadronas imprescindibles para el alumbramiento del capitalismo.

Los empresarios como Tasarov comprendieron que [...] los *gruppirovki* eran fuerzas del orden privatizadas. [...] estas flexibles bandas auto organizadas comprendieron que de forma instintiva que existía una gran demanda por sus servicios de ‘protección’ o seguridad por parte de la nueva clase empresarial. En lugar de pagar impuestos al Estado, que no tenía idea de cómo fiscalizar las nuevas pequeñas empresas, las compañías entregaban de todo corazón entre 10 y 30% de su facturación a los matones locales, que a cambio se aseguraban de que su cliente continuara operando sin ser víctima de los *gruppirovki* que trabajasen para la competencia. ‘Estamos dispuestos a aceptar la protección por que nos cobran el 10% –señaló en aquella época un empresario de Omsk– mientras que el Estado se queda un 90% en impuestos y aún más en multas’”. *Ibid.*, p. 71.

seguridad que neutralizan cualquier intento por combatirlos. Lo que Attali pensó como una posibilidad que supuestamente tendrá lugar en las siguientes décadas, hace tiempo que pasó de una etapa primigenia a otra en la cual las estructuras mafiosas aún no han deglutido todo el cuerpo del Estado, pero sí varios órganos.

Albania, Nigeria, Indonesia, Venezuela, Colombia, México, Honduras o Jamaica, son lugares donde la delincuencia organizada ha llegado a ser indistinguible de las autoridades o bien la violencia delictiva deja más muertos que una guerra civil. Las razones son multifactoriales pero el común denominador apunta a una debilidad endémica del aparato judicial –contemplando dentro de éste a las corporaciones policiales–. Una de las tendencias destacadas por este ex colaborador de François Mitterrand que seguirá apareciendo en el presente siglo, según él, es la desintegración de territorios y la consecuente fagocitación de los Estados que los componen; de no desmontar el enraizamiento financiero y los contactos político-empresariales de los sindicatos criminales que anidan por doquier y que mueven cerca del 20% de la economía global, además de ofrecer opciones laborales a sectores pauperizados que encuentran una incierta oportunidad de vida en las filas del crimen, éstos podrían articularse con fines políticos hasta formar “repúblicas pirata” ajenas al derecho internacional. Somalia, Sudán, Chad, Guinea Bissau, Irak y Afganistán son los antecedentes más actuales de lo que Attali llama un “no Estado”.<sup>23</sup> Si agregamos que existen sitios donde la geografía es accidentada y la justicia no toca todo el territorio o en su lugar opera la ley del más fuerte, no cabe duda que podrían desarrollarse esta clase de soberanías “mafioterroristas”. Dice al respecto:

Algunas de estas fuerzas [ilegales] se unirán contra ciertos Estados, y, en particular, contra ciertas democracias: se verán –de hecho ya se ven– barones de la droga que se pondrán al servicio de causas políticas o que utilizarán a inmigrantes para pasar su mercancía. Se verán –ya se ven– naciones en ruinas convertidas en guaridas de mafiosos; fuerzas terroristas, nómadas por naturaleza, que encontrarán refugio en no-Estados; organizaciones mafiosas que sostendrán ambiciones políticas, laicas o religiosas, como ya lo hizo la Mafia, la Cosa Nostra o los gangsters franceses que se convirtieron en colaboracionistas en 1940. Y se verán también –de hecho ya se ven– violencias urbanas tan extremas que exigirán respuestas más militares que policiales. Frente a estas amenazas o agresiones, las naciones necesitarán un número cada vez mayor de soldados y policías [...]<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Attali, *op. cit.*, p. 192.

<sup>24</sup> *Ibid.*, pp. 193-194.

El pronóstico más lógico sobre los desenlaces que tendrá la criminalidad, especialmente en naciones como México o Brasil, donde los forajidos alcanzan un poder de fuego casi equiparable al del gobierno, se comprueba con la militarización de la seguridad pública. Lo que antes era un problema de policías contra ladrones escaló hasta convertirse en una hidra de siete cabezas que, por momentos y en algunas áreas, dobléga a la fuerza pública, anula el Estado de derecho y corrompe comunidades cuyos miembros trabajan para ellos. Las disputas armadas entre bandas delictivas, ya sea en las favelas de las urbes brasileñas o en los campos guerrerenses donde se produce la goma de opio, engendra feudos que pueden resistir por largos años su sometimiento al imperio de la ley.

Al comienzo de la Posguerra Fría, Steven Metz, profesor de la Escuela de Guerra del Ejército norteamericano, ubicó al narcotráfico como uno de los mayores desafíos globales. Metz comprendió que la criminalidad organizada iba a volverse un foco de ingobernabilidad en muchos países.<sup>25</sup> Y no le faltaba razón. Esta tesis se emparenta con la de Mary Kaldor, quien sostiene que las contiendas bélicas después del mundo bipolar serían entabladas por intereses no estatales, “empresarios de la violencia” o “señores de la guerra” (*warlords*) que persiguen el control de ciertos recursos en aras de su propio enriquecimiento. Estas categorías han sido utilizadas para describir combates armados y luchas interétnicas en regiones en las cuales los gobiernos desfallecen o ni siquiera son percibidos como tales, sobre todo en África. Por los mismos años en los que Metz hablaba de nuevas formas de insurgencia, la politóloga británica apuntaba que las próximas guerras se caracterizarían por el “desdibujamiento de las distinciones entre guerra, crimen organizado y violaciones a gran escala de los derechos humanos”.<sup>26</sup> Sus predicciones fueron acertadas si reparamos en la crisis humanitaria que escondían las estrategias para combatir el crimen organizado en México un lustro después.

Antes de que Attali estimara el surgimiento de “ejércitos piratas” –como resultado natural de la fractura y debilidad crónica de los Estados que no pudieran mantener su cohesión interna–, Metz y Kaldor fueron los primeros en describir a los movimientos armados del futuro: una especie de “insurgencia comercial” que sólo buscaría ganancias privadas valiéndose del saqueo y el bandidaje. El hampa mexicana, las guerrillas colombianas, las pandillas centroamericanas o los grupos rebeldes nigerianos encajan en el molde de una nueva insurgencia.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Steven Metz, *The Future of Insurgency*, s/l, U.S. Army War College, 1993, s/p.

<sup>26</sup> Mary Kaldor, *Las nuevas guerras. Violencia organizada en la era global*, Barcelona, Tusquets, 2001, p. 16.

<sup>27</sup> Guadalupe Correa-Cabrera, *Los Zetas INC.*, México, Planeta, 2018, p. 176.

Josep Baqués Quesada, otro especialista en seguridad internacional, retoma las hipótesis de sus colegas anglosajones y propone que, efectivamente, “en la época que nos ha tocado vivir, que lo es también de las redes de actores transnacionales, de la aldea global, o de la seguridad compartida”, los conflictos armados “combinan elementos propios de las guerras tradicionales y de las pautas del crimen organizado, de modo que envuelven ‘un enemigo o bien una red de enemigos que buscan primordialmente su propio beneficio, sin perjuicio de lo cual suelen tener un discurso político y una capacidad para la planificación estratégica’”.<sup>28</sup> En un mundo marcado por las catastróficas secuelas del cambio climático, no es absurdo conjeturar que en la disputa violenta por los recursos naturales y los mercados no sólo participen las fuerzas beligerantes de los países que se declaren las hostilidades sino también guerrillas, mafias bien pertrechadas y ejércitos irregulares comandados por bandidos que busquen apropiarse de esos bienes escasos o de acelerado valor comercial.

Las perspectivas de que así sean las conflagraciones en lo que resta del siglo encuentran sus antecedentes en los señores afganos de la guerra en tiempos de la invasión soviética; conforme estos hombres del monte y sus tropas recuperaban territorios, la situación se tornaba propicia para hacerse cargo de las recaudaciones y tomar posesión de las aduanas, especialmente “las que permitían gravar el lucrativo comercio con Irán”. Prácticamente ellos cubrieron los vacíos de una maltrecha o inexistente presencia gubernamental. Para ser más precisos, supieron hacerse de cotos y “cuotas de poder sustraídas a un gobierno” que debía “ostentar el control real del brazo armado del país, de la fiscalidad, del poder judicial o de la circulación de la moneda, entre otros campos de actuación nucleares”.<sup>29</sup> Sus principales líderes:

[...] no se limitaron a aprovecharse de las lagunas de un Estado en bancarrota económica e institucional tras la invasión soviética y la subsiguiente guerra civil. Hicieron mucho más que eso. En realidad, su empecinamiento en mantener los privilegios alcanzados por la fuerza de los hechos era, en sí mismo, un pulso a Kabul y un lastre para la reconstrucción del Estado (con sus atributos elementales) en el conjunto del territorio afgano. Si bien el formato de su actuación no pasó tanto por la conquista de la capital como por lograr que desde la capital les dejaran las manos libres para poder seguir haciendo sus negocios en sus feudos.<sup>30</sup>

En los países que padecen con mayor crudeza el flagelo del crimen organizado, que viven petrificados por la delincuencia común o que el gobierno está desbordado por la mezcla de

<sup>28</sup> Metz *apud* Baqués, *op. cit.*, p. 104.

<sup>29</sup> *Ibid.*, p. 124.

<sup>30</sup> *Idem.*

ambos, las bandas más peligrosas tendrían el potencial para mutar sus acciones en un movimiento secesionista, actuar como una guerrilla que siembre inestabilidad y no permita el funcionamiento del Estado o formar un ejército mercenario bien organizado que no se desvincularía del robo a gran escala, el pillaje de recursos, el lavado de dinero, el tráfico de personas, drogas, armas o bienes de alto valor en el mercado. En África proliferan grupos armados que no sólo alteran la paz social so pretexto de una causa étnica, religiosa o política; los que no se financian ilegalmente, haciendo gala de un *modus operandi* totalmente piratesco, entonces promueven el terrorismo y ejecutan crímenes de lesa humanidad para controlar territorios, reclutar militantes por la fuerza o minar la confianza pública en las autoridades locales.

Lo que Attali prevé como un posible destino geopolítico, hasta ahora, el derecho internacional y la coordinación entre países lo ha podido contener; sin embargo, las condiciones adversas que empuja el cambio climático y la disputa por los recursos naturales podrían favorecer la aparición de autarquías que se enfoquen a defender y racionar sus riquezas o en el peor de los casos, la formación de territorios feudalizados conducidos abiertamente por clanes mafiosos o ejércitos mercenarios dispuestos a conquistar y saquear regiones. Lo que pensaríamos como un argumento de ciencia ficción deja de serlo cuando se proyecta la ingobernabilidad que significará el desplazamiento de millones de personas por el aumento de la temperatura global. Imaginemos qué pasaría si las grandes urbes reducen drásticamente su consumo de agua –es el caso de Ciudad del Cabo en Sudáfrica–, si los alimentos sufren considerables encarecimientos por la pérdida de biodiversidad y la esterilización de tierras cultivables, si el desempleo se agudiza aún más por la robotización o si las desigualdades entre regiones y clases se tornan insostenibles hasta convertirse en revueltas y saqueos sin móvil ideológico alguno. Bajo estas hipotéticas situaciones, los vacíos de poder y la demanda de bienes y recursos con potencial de escasear podrían ser cubiertos por poderes fácticos que compitan con, y desplacen a, los representantes de un orden legítimamente establecido.

Semejantes perspectivas se corresponden con la hipótesis formulada por Colombo en el trabajo interdisciplinario aludido al principio. Desde los tempranos años setenta el autor de *La tercera posguerra* proponía que el ejercicio de la violencia legítima en el mundo contemporáneo se encaminaba hacia su desmonopolización en una suerte de “neofeudalismo”, bajo el cual “la privatización de bloques enteros de actividad humana [se desprenderían] de la estructura jurídica

y organizativa del estado moderno y de su economía [para reorganizarse] de forma autónoma”.<sup>31</sup> ¿Crimen organizado sin fronteras? ¿Gobierno de las multinacionales? ¿Separatismos regionales? Algunas respuestas las está asomando el presente y terminará de rectificarlas o en su caso desmentirlas lo que deparé el futuro. En una prospectiva sobre los escenarios que podrían marcar la historia humana, Colombo parece vaticinar que la disgregación social atizará una situación crítica –sea por la anomía que se vive y agudiza en muchas partes del mapa terráqueo, el desempleo estructural<sup>32</sup> o la migración masiva por el empeoramiento de las condiciones de vida–. Mucho antes de que la globalización fuera una palabra de uso común o un concepto para expresar la compleja evolución del capitalismo, este analista internacional se aventuraba a imaginar su lado más oscuro. Las certezas que conocimos entre la segunda posguerra y la llegada del neoliberalismo, como un empleo seguro o el acceso a la educación como palanca de movilidad social, habrán sido sustituidas por un permanente estado de incertidumbre.

Si se proyecta el crecimiento exponencial de la exclusión social y la precarización de la vida laboral a partir de los bajos salarios o el subempleo en sus múltiples formas, pensando en contextos donde la mediación de la justicia muestra tremendas debilidades, las circunstancias serán favorables para la aparición de tierras sin ley<sup>33</sup> o no-Estados con otra composición de clases diferente a la era industrial. Difícil saber con exactitud cómo estarán estructuradas las sociedades después de 2050; aunque el panorama se antoja complejo, varios factores nos hacen dilucidar que habrá trabajadores estacionarios, pocos obreros sindicalizados –tal vez ninguno–, nuevos nómadas –Attali *dixit*–, elites corporativas y gubernamentales, profesionistas en permanente reinención, así como distintas categorías de sectores empobrecidos que no cabrían en una sola clasificación; como ya ocurre en la actualidad, algunas de estas últimas serían carne de cañón de redes delictivas, grupos de piratas, partidas de bandidos u organizaciones terroristas. En el mejor de los casos, sólo un fuerte consenso internacional y una efectiva vigilancia de su cumplimiento,

---

<sup>31</sup> Furio Colombo, “Poder, grupos y conflicto en la sociedad neofeudal”, en *La nueva Edad Media*, Madrid, Alianza editorial, 1974, p. 55.

<sup>32</sup> Rubinstein también ocupa el término “neofeudalización” para explicar que la deslocalización industrial bajo el modelo posfordista, el cambio en las funciones económicas y regulatorias de los gobiernos, la precarización laboral, la automatización y el debilitamiento de la sociedad civil frente al peso y la fuerza de los poderes financieros, están endureciendo y nulificando las oportunidades de movilidad social vertical; es decir, la sociedad actual tiende a feudalizarse no sólo en el sentido de que la violencia ya no es privativa de los Estados sino también porque las extremas desigualdades y la falta de voluntad política para superarlas –o por lo menos reducirlas– está produciendo un nuevo tipo de sociedad estamental con amos y señores (“elites programadoras” y masas pauperizadas). Rubinstein, *op. cit.*, pp. 59-119 y pp. 169-196.

<sup>33</sup> Colombo, *op. cit.*, p. 56.



como los compromisos de la agenda 2030, podrían derrotar los móviles estructurales que ahondan las desigualdades y que facilitan la lumpenización de la sociedad en provecho de agrupaciones delictivas que tienen a la mano un ejército de reserva barato y desechable.

## **Refeudalización en América Latina**

En América Latina la refeudalización del poder es un hecho que relativiza la aspiración de vivir bajo sistemas genuinamente democráticos. Si el ingrediente central de una democracia moderna es un Estado de derecho que someta a gobernantes y gobernados al cincho de la ley, y no solamente la celebración de elecciones libres, difícilmente podría creerse en la consolidación plena de dicha forma de gobierno si las decisiones más importantes no reflejan la opinión de la ciudadanía o son tomadas a sus espaldas. Ciertamente, han existido intentos por implantar sistemas democráticos después de las experiencias autoritarias que vivió la región entre 1960 y 1990, pero éstos han cumplido parcialmente y, al final del camino, la ausencia de un Estado fuerte que aplique la ley y vigile cabalmente por su cumplimiento abonó el crecimiento de poderes ajenos o contrarios a su soberanía, trátese de plutocracias, elites políticas proclives a la corrupción u organizaciones criminales. En este lado del Atlántico la feudalización del poder no avanza tan rápido como en algunos países de África y Medio Oriente; sin embargo, la ruptura del monopolio legítimo de la violencia resulta preocupante aún para nuestros propios parámetros.

El capitalismo latinoamericano arrastra la impronta que lo fundó en el siglo XVI. La acumulación por desposesión, una versión actualizada de la acumulación originaria de capital,<sup>34</sup> es la fase evolutiva de dicho proceso en la era global. El crimen organizado, para definirlo bajo este parámetro, es su expresión más acabada. El narcotráfico, el robo de hidrocarburos, la trata de

---

<sup>34</sup> En el glosario marxista, la acumulación originaria de capital antecede a la apropiación de plusvalía, pues se basa en el despojo, el engaño, el saqueo o cualquier otra forma de violencia que sirva para privatizar los medios de producción. Para ser más exactos: la mercantilización de la tierra; la expulsión forzosa de poblaciones campesinas; la conversión de diversas formas de propiedad en derechos de propiedad exclusiva; la supresión de modalidades de producción y consumo alternativo; los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de expropiación de riquezas, incluidas las naturales; la usura; y el robo de propiedades por medio de estafas y procesos judiciales viciados. El monopolio de la violencia estatal y “sus definiciones de legalidad”, dice David Harvey, juegan un rol clave para respaldar y promover estas acciones. Este profesor de economía política concluye que la lógica subyacente de tales procedimientos siguen teniendo vigencia en el mundo contemporáneo; de hecho conviven y se entremezclan con los supuestos de un “capitalismo bueno” que apuesta por la competencia, que opera dentro de un marco jurídico garante de la propiedad privada y que se acompaña de un Estado “facilitador” de las libertades económicas. Las modalidades periféricas del neoliberalismo encajan en este paradigma de acumulación por desposesión. David Harvey, “El ‘nuevo’ imperialismo: acumulación por desposesión”, en Leo Panitch y Colin Layes (eds.), *Socialist Register 2004. El nuevo desafío imperial*, Buenos Aires, CLACSO, 2005, pp. 111-115.

personas, el despojo de tierras para explotar yacimientos minerales o extender monocultivos, los cobros de piso, el lavado de dinero, la explotación sexual, el tráfico de migrantes y tala ilegal, entre otras actividades, son “parte integral de las actuales tendencias de refeudalización. Si se revisan las listas de las personas más ricas del mundo, se puede ver que en ellas se encuentran muchos criminales. En 1987 *Forbes* incluyó al narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria y a los hermanos Ochoa, Jorge Luis, Fabio y Juan Davis, de origen colombiano, en la lista de las personas más ricas”.<sup>35</sup> Posteriormente se sumarían a esa lista de “nuevos caballeros ladrones” más de un capo mexicano.

Un poder financiero tan avasallante como el de estos personajes, cuya fortuna les permite salir en una revista dedicada a cuantificar la riqueza alrededor del mundo –aunque no la hayan obtenido por cauces legales–, no puede concebirse sin una reserva multinivel de influencias políticas, una clase empresarial cómplice o un aparato de justicia francamente deficiente. Su irrupción en la economía, sea como inversionistas o bien como válvulas de liquidez monetaria;<sup>36</sup> las relaciones de poder que posibilitaron su crecimiento *urbi et orbi* –desde los circuitos financieros hasta los gabinetes oficiales involucrados con ellos–; su impacto en la cultura popular y los imaginarios sociales que los representan como amos y señores de sus regiones natales, les confieren los rasgos necesarios para integrarse a las nuevas elites latinoamericanas que trajo consigo la globalización –independientemente de su condición ilícita–. La falta de oportunidades que tanto caracteriza a la región, por otro lado, también coadyuvó a dinamizar la multiplicación de organizaciones que viven en la economía criminal; el enrolamiento de vasallos dispuestos a todo con tal de percibir un ingreso que el sistema económico formal no pudo ofrecerles alimenta la base social de estos señores feudales del siglo XXI latinoamericano.<sup>37</sup> Al hacer una analogía entre la Edad Media y la actualidad, Olaf Kaltmeier no duda en llamarlos con ese título:

---

<sup>35</sup> Olaf Kaltmeier, *Refeudalización*, Bielefeld, CALAS/Universidad de Guadalajara, 2019, p. 68.

<sup>36</sup> Nicolás H. Hardinghaus, “Droga y crecimiento económico: el narcotráfico en las cuentas nacionales”, en *Nueva Sociedad*, núm. 102, julio-agosto 1989, pp. 94-106.

<sup>37</sup> “[...] Las bandas sustituyen a los extintos movimientos sociales y son la única forma de vida que se ofrece a los jóvenes desempleados. Ya no hay líderes políticos, sino cabecillas y jefes de bandas. Estos nuevos jefes son quienes ofrecen salarios, mueven las redes de influencia, ofrecen un status a los pobres [...]”. James Petras, *La izquierda contraataca*, Madrid, Akal, 2000, p. 140.

Aunque esta disertación de Petras aborda la despolitización que imperó entre los sujetos sociales con mayor potencial de movilización política durante el llamado “fin de las ideologías”, su argumento intenta explicar el auge del delito como un *modus vivendi* que no exigía compromisos ideológicos pero sí oportunidades de ingreso –y enriquecimiento personal– que las fragmentadas sociedades latinoamericanas no le ofrecían al sector más dinámico de la sociedad.

[...] los carteles han expandido considerablemente sus sectores económicos más allá del tráfico de drogas, llegando a áreas como la prostitución y el tráfico de humanos y órganos. La extorsión es igualmente un negocio lucrativo, el cual desestabiliza el monopolio de uso de la fuerza por parte del Estado [...]. Sus formas más sencillas son el robo y la extorsión. Como caballeros ladrones, o bandidos de la Edad Media europea, que se oponen a las reglas del emergente sistema mercantil y del poder de los señores feudales, grupos armados atacan residentes locales e inmigrantes. Pero más allá del bandidaje, los carteles en México y Colombia ahora están emergiendo como nuevos señores feudales, pidiendo el pago de impuestos, o cuotas, para garantizar la seguridad de aquellos que habitan territorios habitados por ellos. A cambio de los derechos burgueses-democráticos, se impone a las autoridades locales el principio feudal del pago por protección. En Colombia, en 2009 se instauraron las “vacunas”, un eufemismo para referirse al pago por protección a la mafia, el que sumó, entre varios grupos delictivos, el monto de mil millones de dólares.<sup>38</sup>

Pensando en la configuración de un mundo más complejo e impredecible –que presenta nuevos riesgos de alcance global–, con un entorno político que deja atrás los grandes referentes ideológicos del siglo XX, desde las postrimerías de la Guerra Fría algunos politólogos e internacionalistas se han preguntado qué características tendrán los conflictos bélicos de las próximas décadas. Como ya se dijo en el apartado anterior, las guerras civiles en África durante los años noventa, donde los bandos en pugna no distinguían sus acciones del saqueo y las masacres contra la población civil que se hallaba a merced del fuego cruzado, dieron la pauta para el uso de conceptos tales como “señores de la guerra”, “empresarios de la violencia” o “nuevos insurgentes”. Empero, la aparición y el crecimiento acelerado del militarismo islámico a partir de 2001 como el tópico geopolítico de moda hicieron que las antedichas terminologías pasaran a un segundo plano o dejaran de utilizarse.<sup>39</sup>

Esos criterios, que habían servido para explicar las conflagraciones civiles africanas, ayudaron a interpretar la descomposición del orden punitivo, la violencia criminal en las megalópolis, la presencia de paramilitares y el encumbramiento de los cárteles de la droga en América Latina. En otras palabras: la refeudalización del poder. En países como México o Colombia, estos señores de la guerra:

[...] no sólo desestabilizan la estatidad, sino que, más bien, colonizan estructuras del Estado ignorando el Estado de derecho. En contextos africanos, el antropólogo Gero Erdmann habla de “sistemas de gobierno neopatrimonial”. Quizás esto es más evidente en Colombia, dada la cercana colaboración entre el ejército regular y los paramilitares durante la década de los noventa, con la consecuente colonización del estado colombiano por parte de los paramilitares. El lado económico

---

<sup>38</sup> Kaltmeier, *op. cit.*, pp. 69-70.

<sup>39</sup> *Ibid.*, p. 70.

de esta refeudalización de la violencia se expresa en conceptualizaciones tales como “economía de la violencia” y “mercado de la violencia”.<sup>40</sup>

La captura de instituciones políticas, oficinas judiciales y cuerpos de seguridad a manos de organizaciones delictivas es la antesala del control territorial que después los faculta para desempeñarse con impunidad en los rentables mercados de la violencia. Si el crimen organizado es la expresión más salvaje del capitalismo –sin leyes, regulaciones, reparos éticos o límites de ninguna clase–, la incursión de los barones de la droga en otros negocios que no habían sido de su incumbencia amplió sus márgenes de ganancia y por ende el poder corruptor del que ya disponían. Los paramilitares colombianos –que en un principio fueron contratados y financiados por los terratenientes ganaderos que buscaban protegerse de los secuestros y las extorsiones de la guerrilla– no descuidaron el trasiego de estupefacientes para dedicarse al cobro de piso, el comercio de combustible robado, el lavado de activos, la minería ilegal y el ofrecimiento de sus servicios como sicarios o despojadores de tierras.

La acumulación originaria de la que se habló párrafos atrás encuentra en el narcoparamilitarismo colombiano un ejemplo tan actual como revelador. De acuerdo con una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos y con un informe de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, entre 1997 y 2004, con el fin deliberado de usurpar y explotar tierras agrícolas adonde podían expandir los cultivos de banano, la compañía Chiquita Brand pagó 1.7 millones de dólares en distintas exhibiciones a la organización terrorista y paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia para que realizaran semejante tarea. Este drama humanitario, que le costó a la nombrada multinacional una condena legal en su país de origen, contribuyó a los miles de desplazamientos forzados, asesinatos, desapariciones y despojos violentos que tuvieron lugar en el país sudamericano a raíz del conflicto interno que vive desde 1948.<sup>41</sup>

En Venezuela, Brasil y los países del triángulo centroamericano, la existencia de estos ejércitos lumpen también pone a prueba la legitimidad del gobierno y la fortaleza de sus instancias procuradoras de justicia. Aunque no han tocado las puertas del Congreso hasta tener una bancada de representantes pagados por el paramilitarismo, como sucedió en Colombia, en la

---

<sup>40</sup> *Idem.*

<sup>41</sup> *La contribución de ejecutivos de Chiquita en la comisión de crímenes de lesa humanidad en Colombia: comunicación bajo el artículo 15 del Estatuto de Roma de la Corte Penal internacional*, La Haya, FIDH/IHRC/Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 2017, pp. 16-39.

vecina Venezuela el talón de Aquiles del oficialismo es el desbordamiento de la delincuencia, tanto la común como la organizada; el país andino presume una de las tasas más altas de homicidios dolosos. Tan sólo en 2019, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia, 16,506 personas fenecieron violentamente.<sup>42</sup> Los barrios que circundan las grandes ciudades son disputados a muerte por partidas de bandidos fuertemente armados. Durante el día bajan a la ciudad a cometer secuestros, asaltos y extorsiones; al caer la noche entablan una guerra territorial con sus enemigos. Desde hace años, muchísimo antes de que falleciera Hugo Chávez, las policías metropolitanas habían quedado rebasadas y, en no contadas ocasiones, sus agentes estaban coludidos con el hampa o eran bandidos de medio tiempo que también cometían plagios y robos con violencia.

Las cárceles venezolanas son el capítulo más crítico de esta historia pues el Estado se revela incapaz de recuperar el manejo de los centros penitenciarios, que son bases operativas y, literalmente, centros de convivencia desde las cuales los jefes del crimen –conocidos como “pranes”– planean y dirigen con escandalosa impunidad las fechorías que alimentan el desgobierno y la anomía que tienen inmóviles a los venezolanos. Se sabe, pues así lo ha denunciado la prensa, que gracias a la complicidad de las autoridades responsables de las penitenciarías los cabecillas forman “megabandas” para llevar a cabo ilícitos de toda laya.<sup>43</sup> Algunas de ellas presumen en redes sociales el uso de armas pesadas, como metralletas, rifles de asalto y granadas.<sup>44</sup> En lo que puede llamarse una *pax* mafiosa, la existencia “de grandes bandas criminales organizadas que controlan” barrios enteros ha contribuido, por paradójico que suene, a que disminuyan los homicidios.<sup>45</sup> La lumpenización del tejido social –situación que se refleja en los estilos de vida y las relaciones sociales que giran alrededor del delito y la violencia–<sup>46</sup> y la captura territorial de los bandidos está convirtiendo a la nación sudamericana en una advertencia sobre el destino al que podrían enfrentarse otros países cuando la sincronización de acciones

---

<sup>42</sup> “Informe anual de violencia 2019”, en *Observatorio Venezolano de Violencia*, 27 de diciembre de 2019, <https://observatoriodeviolencia.org.ve/news/informe-anual-de-violencia-2019/>.

<sup>43</sup> “La delegación del poder estatal: ‘los pranes’”, en *InSight Crime*, 20 de mayo de 2018, <https://es.insightcrime.org/investigaciones/la-delegacion-del-poder-estatal-los-pranes/>.

<sup>44</sup> “Así actúan las bandas criminales en Venezuela”, en *Youtube*, 19 de septiembre de 2019, [https://www.youtube.com/watch?v=n3fT2\\_y9VCU](https://www.youtube.com/watch?v=n3fT2_y9VCU).

<sup>45</sup> *BBC News Mundo*, 13 de enero de 2020, <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50929754>.

<sup>46</sup> “[A comienzos de diciembre de 2018] el asesinato de un adolescente de 13 años que lideraba una banda criminal puso en evidencia el nivel de penetración del crimen en la región. [En] otros estados como Sucre, en la costa oriental venezolana y Trujillo, cercano a Colombia, comenzaron a figurar este año entre los más violentos por la expansión del narcotráfico”. *El País*, 28 de diciembre de 2018, [https://elpais.com/internacional/2018/12/27/america/1545936541\\_507318.html](https://elpais.com/internacional/2018/12/27/america/1545936541_507318.html).

entre el crimen organizado y el lumpenaje común desplaza al Estado, desarticula a la ciudadanía y pervierte los códigos de conducta y las aspiraciones sociales. Al adueñarse de los espacios públicos, la inseguridad prácticamente ha cambiado los hábitos diarios; para muestra: después de las seis de la tarde, en Caracas, la gente ya no sale de sus casas y se impone un virtual toque de queda.

Mientras en las áreas metropolitanas la ausencia del Estado es casi total, en entidades como Bolívar, al sur del país, es nula. El crecimiento de la minería ilegal en inmensas extensiones de la selva alienta el asentamiento de grupos armados provenientes de Colombia y sindicatos criminales que gobiernan por medio del terror; en un escenario que recuerda las minas de diamantes en Sierra Leona, la extracción de oro es disputada entre militares venezolanos, guerrilleros colombianos y pranes locales. La región es tierra de nadie. En un poblado cerca de las minas de Las Claritas, por ejemplo, los habitantes suelen consultar al “patrón de la zona” para pedirle favores o la resolución de una disputa entre delincuentes. El pran “resuelve los conflictos locales con mano de hierro, imponiendo multas o medidas disciplinarias que incluyen trabajo comunitario forzado”.<sup>47</sup> En el peor de los casos, las faltas graves se pagan con la muerte o castigos inhumanos.<sup>48</sup>

Las carencias alimentarias, el deterioro de los servicios públicos, el desabasto de productos básicos, la hiperinflación y el bajo rendimiento de los salarios, en conjunto, han incentivado las conductas más antisociales que recuerde la historia venezolana; por otra parte, la criminalidad prácticamente convirtió a la república bolivariana en uno de los sitios más inseguros del planeta. El país avanza hacia su “africanización”, es decir: una economía que no ha podido superar su dependencia del petróleo y que no produce lo que consume; reiteradas prácticas de corrupción –producto de una cultura patrimonialista de larga data–; instituciones precarias que lindan entre el colapso y su funcionamiento simbólico; minas ilegales de oro al sur del país

---

<sup>47</sup> *El peso del oro: violencia en el sur de Venezuela*, Bruselas, International Crisis Group, 2019 (Informe sobre América Latina, 73), p. 11.

<sup>48</sup> Los trabajadores que sacan el mineral de las betas laboran y viven en un entorno marcado por la violencia más cruenta. Un informe de Human Rights Watch documenta asesinatos, mutilaciones y desapariciones forzadas. Las mafias han sustituido al Estado. Ellos “están a cargo de las minas y los pueblos que se han formado en los alrededores, aplican sus normas con brutalidad. ‘Todo el mundo sabe las reglas’, dijo una residente. ‘Si robas oro o lo mezclas con otro producto, el pran [líder del sindicato] te golpea o te mata’. Otro dijo: ‘Son como el gobierno [...] Si roban, los desaparecen’. [...] cuatro residentes señalaron haber visto a miembros de un sindicato amputarles las manos o dispararle en las manos a personas que supuestamente habían robado. Varios [...] residentes dijeron conocer casos en que miembros de [los] sindicatos [mafiosos] habían desmembrado con motosierras, hachas o machetes a quienes transgredieron las reglas”. *Violentos abusos en minas de oro ilegales en Venezuela*, s/l, HRW, febrero 2020, p. 5.

controladas abiertamente por criminales, donde se cometen masacres y otras atrocidades;<sup>49</sup> y una violencia delictiva en las principales ciudades que todos los años deja más muertes que una guerra civil. Entre los apagones, la escasez de alimentos, el aislamiento internacional, la población que busca salir del país, el colapso de la salud pública y la inseguridad imbatible, en algún punto, aunque sea exagerada la comparación, todos estos factores asimilan la vida diaria de los venezolanos con la distopía imaginada por Vacca. Por cierto, uno de los lugares en los que Attali adivina un porvenir oscuro es Venezuela, “cuyos yacimientos [petrolíferos] quedarán un día agotados” o desplazados por la introducción de energías renovables; cuando eso suceda, además de no haber edificado una economía moderna, podría “convertirse, o convertirse de nuevo, en [una zona] de conflictos”.<sup>50</sup>

En Brasil, la pérdida del dominio territorial a manos de la delincuencia no es menos preocupante. El gigante sudamericano padece desde hace medio siglo una inseguridad endémica en sus capitales. Cuando las acciones policiales no atropellan garantías civiles o matan inocentes a gatillo fácil, entonces son las células de narcotraficantes y bandidos las que pautan la intranquilidad. Aunque la violencia brota por todo el país, en ciudades como Río de Janeiro, São Paulo, Arrecife o Fortaleza es más palpable. A pesar de los operativos para capturar delincuentes, la depuración de policías corruptos, el control de armas y la instrumentación de políticas preventivas en las favelas, el problema es persistente. Cuando el aumento de robos y homicidios comprobó que las autoridades estatales habían sido rebasadas por las actividades del hampa, en 2018 el gobierno federal dio un golpe de timón en sus políticas de seguridad pública; por primera vez, desde el regreso de la democracia, las Fuerzas Armadas tuvieron competencias *de jure* y no *de facto* en la materia.

La militarización de la seguridad contempla que los cuerpos castrenses puedan “llevar a cabo registros masivos sin autorización judicial previa. De esta manera, los militares poseen libertad de movimiento para entrar en cualquier casa del distrito en cuestión, con o sin sospechas

---

<sup>49</sup> “Los informes de los medios de comunicación indican que se han producido doce masacres en el estado Bolívar desde 2016, que han dejado 107 muertos. Con seguridad, la cifra real será mucho más alta; muchos asesinatos no se denuncian porque ocurren en lugares remotos, a menudo habitados por indígenas, con infraestructura limitada de transporte o comunicación. Las comunidades victimizadas temen hablar con terceros, incluso cuando sus familiares desaparecen”. *El peso del...*, *op. cit.*, p. 2.

<sup>50</sup> Attali, *op. cit.*, p. 215.

de que se haya cometido algún delito o de que exista relación con el narcotráfico”.<sup>51</sup> El caso brasileño es ideal para preguntarse si la inseguridad necesariamente disminuye con un mayor desarrollo socioeconómico; a lo largo de la década pasada y en los primeros años de esta, cuando el país crecía a ritmos extraordinarios, los salarios mejoraban sustancialmente y los programas sociales ayudaban a combatir la pobreza, la criminalidad no cedió terreno. El asunto no estuvo cerca de resolverse. Entre 2000 y 2010 cerca de 60 mil jóvenes fueron asesinados en la zona metropolitana de Río.<sup>52</sup> La mejora objetiva de las condiciones materiales de la población mitigó el problema pues atendía sus causas estructurales, pero tampoco determinó su resolución o bajó de forma drástica los homicidios con arma de fuego. Las cofradías de forajidos en las favelas siguieron imponiendo su ley.

Es digno de hacerse notar que un país donde se padece el flagelo del delito desde el siglo XIX y que lleva 50 años probando distintas estrategias para combatirlo en las grandes urbes – desde la clásica estrategia de mano dura hasta los proyectos de reinserción social y coordinación vecinal en los barrios más peligrosos–, no ha podido encontrar la fórmula idónea –o por lo menos la más eficaz– para reducir una de las sangrías humanas más elevadas de Latinoamérica en tiempos de paz. La violencia no estatal en la historia de Brasil se repite desde su nacimiento como república federal e incluso de tiempo atrás; es un fenómeno asociado a una modernización incompleta, una que vela por la economía pero deja fuera las instituciones judiciales. El uso legítimo de la fuerza:

[Es] una categoría inseparable de la modernidad, que ha criminalizado el recurso privado a la fuerza física (y sus extensiones tecnológicas) para resolver, superar o ganar un conflicto. Por lo tanto, la categoría “violencia” es una categoría moderna y presupone la pacificación de las relaciones sociales, el monopolio legítimo (y legalmente ordenado) del uso de la fuerza física por parte del Estado, y que en su significado límite supone haber alcanzado una judicialización obligatoria de todos los conflictos.

El problema es que en Brasil el Estado nunca consiguió tener completamente el monopolio del uso legítimo de la violencia, ni fue capaz de ofrecer a todos los ciudadanos el acceso universal a la resolución judicial de conflictos. Esto significa que el Estado brasileño no siempre tuvo el monopolio legítimo de la fuerza al interior de su territorio, ni fue capaz de transferir plenamente a la administración de la justicia todos los conflictos cotidianos.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Sonia Alda y Javier Martín, *El pulso del crimen organizado a una potencia regional: Brasil*, documento de trabajo, Real Instituto Elcano, 26 de abril de 2018, <http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/083d56e4-5879-413b-b3c0-4867e9f631d5/ARI58-2018>.

<sup>52</sup> Michel Misse, “La acumulación social de la violencia en Río de Janeiro y en Brasil: algunas reflexiones”, en *Coherencia*, vol. 7, núm. 13, julio-diciembre 2010, p. 21.

<sup>53</sup> *Ibid.*, p. 27.



El *locus* de la violencia contemporánea en América Latina son las ciudades. Si seguimos las líneas explicativas de la sociología dedicada a su estudio encontraremos tres razones que, juntas o por separado, estimulan los delitos en espacios urbanos: la densidad, la exclusión y la desigualdad.<sup>54</sup> El caso brasileño cumple con esos tres requisitos pero también posee elementos contextuales propios; la naturalización de la violencia como un hecho cotidiano para resolver toda clase de diferendos o bien para ajusticiar ladrones, prácticas de uso común desde los años sesenta, con la aparición de los primeros grupos de limpieza social –llamados escuadrones de la muerte–, fue seguida por el incremento inédito de la delincuencia a partir del retorno de la democracia.<sup>55</sup>

El movimiento expansivo del narcotráfico, tanto como su poder económico y métodos intimidatorios, agravó considerablemente las cosas; el auge de esta industria en Colombia tuvo un efecto en los países vecinos. Cuando las principales ciudades brasileñas dejaron de ser puntos de tránsito para convertirse en centros de consumo, la competencia por los mercados ilegales detonó la guerra entre los clanes de hampones asentados en las favelas; muchos delincuentes comunes que vivían de atracos y pillajes se integraron a ellos como soldados del narco. La competencia por la compraventa de estupefacientes generó nuevas demandas de bienes y servicios igual de ilegales: armas,<sup>56</sup> sicariato, lavado de dinero y protección. Este coctel explosivo, determinado por la sincronización de causas internas y coyunturas foráneas, redundó en el empoderamiento de organizaciones delictivas con mayor solvencia financiera, capacidad de fuego y legitimidad social entre ciertos sectores de la población.

En mayo de 2006 demostraron su fortaleza tanto a la opinión pública como al gobierno cuando organizaron una serie de motines en las cárceles mientras en las calles paulistas sus gavillas lanzaban más de 300 ataques y emboscadas contra estaciones policíacas, tribunales, supermercados y edificios públicos. La megalópolis se paralizó y los ciudadanos atestiguaron una verdadera batalla campal, por no decir un brote de insurgencia criminal, entre bandidos y fuerzas de seguridad. En diciembre del mismo año se repitió el episodio a manos de una banda carioca que puso contra la pared a las autoridades de la ciudad portuaria, al gobierno estatal y a la

---

<sup>54</sup> Roberto Briceño León, “La ciudad: ¿escenario o causa de la violencia?”, en Roberto Briceño León (coord.), *Ciudades de vida y muerte*, Caracas, Alfa, 2016, p. 24.

<sup>55</sup> Misse, *op. cit.*, pp. 31-32.

<sup>56</sup> Antonio Rangel Bandeira, *El crimen organizado en Brasil*, s/l, FLACSO-Brasil, 2009, p. 3.

federación; el fuego se dirigió nuevamente contra edificios de la policía, paraderos de autobús e inmuebles particulares. En uno de los transportes incendiados durante el ataque murieron calcinados 8 civiles; fallecieron 18 personas y 32 resultaron heridas en los dos días de batalla campal.<sup>57</sup> La estructura mafiosa que desestabilizó el centro financiero de Brasil por aquellas fechas, además de gobernar los centros de reclusión, tiene mecanismos de recaudación fiscal entre sus miembros, a quienes paga abogados y servicios sociales mientras están presos; gracias a las donaciones y aportes de sus “afiliados”, que por entonces oscilaban la friolera de 130,000 voluntarios, se calcula que obtenían ingresos equivalentes a los 350,000 euros mensuales; con ello controlan el tráfico de drogas, ordenan la compra de armamento, coordinan secuestros y organizan “acciones delictivas de gran impacto”.<sup>58</sup>

En las naciones del triángulo centroamericano las pandillas urbanas son otro ejemplo de organizaciones jerarquizadas que forman autogobiernos penitenciarios y buscan mecanismos para financiarse parasitariamente a costa de los sectores económicamente productivos. Al igual que los países arriba nombrados, la jaula de hierro weberiana es tan relativa como frágil en esta región de Latinoamérica. Los daños sociales que producen y la debilidad oficial para disolverlas y pacificar las calles han forzado que los gobiernos opten por mediar una tregua entre las facciones rivales. En El Salvador, donde las muertes violentas han superado desde hace tiempo las 75,000 bajas humanas que dejó la guerra civil entre 1980 y 1992,<sup>59</sup> las pandillas anunciaron públicamente que, por común acuerdo, decretaban una tregua y entregaban algunas armas. En un acto similar al de una conferencia entre las partes bélicas de una conflagración, en julio de 2012 tuvo lugar un encuentro en la principal plaza pública de San Salvador al que concurrieron líderes pandilleros,

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, p. 1.

<sup>58</sup> *El País*, 19 de mayo de 2006, p. 5.

<sup>59</sup> “[...] ¿Cómo se pueden explicar los excesos y la persistencia de la violencia por mucho tiempo aún en tiempos de paz en los tres países del triángulo del norte? ¿Hay tanta violencia en Honduras, El Salvador y también en Guatemala debido a que allá siempre ha habido tanta violencia? [...]”

Se trata de una violencia criminal en sumo grado: ésta no ha resultado como un problema transitorio; no, ésta ha estado constante. Contrario a los supuestos de muchos expertos no subsiste más el fenómeno en las sociedades de posguerra ya desde hace tiempo –y ni siquiera situado en un primer plano en Centroamérica– que son ex combatientes quienes ejercen la violencia. Más bien se trata de una nueva violencia criminal en tiempos de paz.

En El Salvador y Guatemala se tiene una tasa media de homicidios que supera incluso a las del tiempo de la guerra civil. Desde 2004 supera la tasa de homicidios en Guatemala constantemente a aquellas que se tuvieron en los años últimos del conflicto armado; desde 2009 ocurre esto mismo en El Salvador. Honduras no tuvo una guerra civil en el contexto del conflicto de Centroamérica, al contrario que Guatemala y que El Salvador; no obstante, allá se tiene una tasa de violencia alta hoy día. Todo lo anterior muestra, que es falso el supuesto de que la causa de la violencia criminal en Centroamérica es una perpetuación de la violencia de la guerra civil”. Heidrun Zinecker, *Más muertos que en la guerra civil. El enigma de la violencia en Centroamérica*, documento de trabajo, Fundación Friedrich Ebert, abril 2012, en <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/09184.pdf>.

funcionarios del gobierno, representantes diplomáticos y el secretario general de la Organización de Estados Americanos; este último dio fe de la entrega de un arsenal que garantizaba el compromiso de los bandos en pugna para disminuir la elevada tasa de homicidios, una de las más altas en América Latina.

Las clicas, nombre dado a las células que conforman una pandilla de mayor extensión, son el espacio de socialización y realización personal para miles de muchachos centroamericanos que después de las guerras civiles en sus respectivos países no hallaron mejores oportunidades de vida. El número aproximado de adolescentes y adultos jóvenes que las integran es muy elevado: 500 por cada 100,000 personas en Honduras y 153 en El Salvador.<sup>60</sup> Para que estos países, además de Guatemala, alcanzaran los decibeles de anomía y descomposición social que tienen actualmente tuvieron que conjugarse otras condiciones, principalmente dos. La primera fue la deportación, primero gradual y luego masiva, de pandilleros centroamericanos que habían absorbido los códigos de violencia con los que se relacionaban las pandillas que habitaban en los grandes suburbios norteamericanos, como el de Los Ángeles; éstos eran hijos de migrantes centroamericanos que habían crecido en entornos callejeros hostiles, con problemas de desintegración familiar y deserción escolar. Los primeros jefes pandilleriles importaron nuevas formas de socialización, lenguajes y conductas a los lugares origen de sus padres, adonde fueron deportados por el endurecimiento de las leyes migratorias en Estados Unidos después de 1996.<sup>61</sup>

La segunda condición fue la disponibilidad de armas automáticas, un subproducto de las guerras internas de los años setenta y ochenta. Para citar un dato revelador, hace una década el Ministerio de Defensa de El Salvador estimaba que el 60% de las 500,000 armas existentes eran ilegales.<sup>62</sup> A estos dos elementos hay que agregar otras fricciones de naturaleza estructural que ayudaron a reproducir la violencia homicida que por lo visto no cederá rápidamente en un futuro inmediato: instituciones precarias, presupuestos públicos raquíticos y aparatos productivos incapaces de satisfacer la demanda de empleos –problemática relacionada directamente con la conversión de dichos países en exportadores netos de mano de obra–.

---

<sup>60</sup> Pierre Salama, “Homicidios, ¿es ineluctable la violencia en América Latina?”, en *Frontera Norte*, vol. 25, núm. 49, enero-junio 2013, p. 16.

<sup>61</sup> La Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de Inmigrantes, de carácter retroactivo, aprobó la deportación de migrantes con ciudadanía así como menores de edad. Este instrumento legal sirvió para deportar a miles de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos con antecedentes penales, los cuales serían, a la postre, la semilla de las primeras maras.

<sup>62</sup> Juan Pablo Duhalde, “Las muertes por arma de fuego en El Salvador: la reproducción de una cultura de violencia”, en *Revista CIS*, vol. 9, núm. 14, enero-junio 2011, p. 90.

En sociedades que venían saliendo de una guerra, con abundantes armas en posesión de civiles, no será difícil imaginar que la desafortunada combinación de tales circunstancias alumbró una generación de jóvenes que podían convertirse en un ejército de reserva criminal. Sin posibilidad de un empleo digno y sin una consciencia de clase que los articulara políticamente, el resultado fue una subcategoría social que vive de actividades totalmente dañinas para la economía, restándoles posibilidades de desarrollo a estos países. La firma de los acuerdos de paz en El Salvador (1992) y Guatemala (1996) no significó un porvenir más promisorio ni el fin de la violencia que se había arraigado en las sociedades centroamericanas. Todo lo contrario. Las nuevas realidades de la posguerra engendraron un periodo tan caótico como el de una pugna entre dos bandos armados que se disputan la conquista del Estado; la rivalidad entre pandillas callejeras en Ciudad de Guatemala, San Pedro Sula o San Salvador no tiene afanes políticos pero, en el camino, la perenne inseguridad, la corrupción institucional, las tasas de homicidios y la pérdida del control territorial por parte de las autoridades, sí “constituyen un obstáculo para la consolidación” de una gobernabilidad democrática<sup>63</sup> y complican gravemente la anhelada promesa de alcanzar mejores estándares de vida.

Si bien es correcto que las “maras” carecen de los medios financieros para corromper funcionarios de altísimo nivel e influir en la conducción del gobierno, como el narcoparamilitarismo colombiano, sí son un foco de ingobernabilidad pues arrebatan físicamente el dominio y la jurisdicción que le corresponden a las autoridades; de igual forma, atorán el funcionamiento de la economía cuando ellos imponen toques de queda y, so pena de muerte o sufrir un atentado, cobran cuotas extorsivas a comerciantes y pequeños propietarios.<sup>64</sup> Incluso han consumado actos espeluznantes que lindan en el terrorismo.<sup>65</sup> Sus procedimientos trascienden la caracterización que hizo de las pandillas juveniles el sociólogo Carlos María Perea

---

<sup>63</sup> *Idem.*

<sup>64</sup> El 5 de febrero de 2008 cinco conductores fueron acribillados en diferentes lugares de la capital guatemalteca por pandilleros que intentaron sacarles dinero por la fuerza. *Reforma*, 6 de febrero de 2008, p. 6.

<sup>65</sup> El primero de ellos ocurrió el 23 de diciembre de 2004 al sur de San Pedro Sula: un autobús de pasajeros fue emboscado por mareros, ocasionando la muerte de 28 personas inocentes; los responsables dejaron un mensaje intimidatorio con dedicatoria al presidente Ricardo Maduro y otras autoridades, entre ellas el secretario de seguridad. *La Jornada*, 26 de diciembre de 2004, p. 22.

En San Salvador la barbarie pandilleril se reflejó en la quema de otro autobús en la localidad de Mexicanos el 20 de junio de 2010; a diferencia del atentado en la ciudad hondureña, amén de horrorizar a la sociedad, éste sembró miedo colectivo. Una clicla interceptó un bus con pasajeros, mató de un balazo al chofer, al cobrador y se dispuso a rociar con gasolina el interior de la unidad; otros bandidos, por fuera de la unidad, echaron combustible sobre los neumáticos y la parte trasera para prenderle fuego; los pasajeros que intentaban salir aterrorizados por las ventanillas del vehículo en medio de las llamas eran ultimados a balazos. El saldo fue de 16 muertos y 9 heridos de gravedad. *Proceso*, núm. 1770, 3 de octubre de 2010, p. 40.

Restrepo, quien afirmó que las transgresiones cometidas por ellas siguen patrones definidos pues “su robo y su violencia son localizados: atacan personas y asaltan casas y comercios pero no practican el delito de alto nivel, el propio de la banda organizada”.<sup>66</sup> Al menos en esta zona del istmo centroamericano, la amenaza pandilleril toma otras dimensiones. A su manera y en su contexto, explican la refeudalización del poder.

### **México: “neocaciquismo criminal”**

En México, la privatización de la violencia es bastante anterior a las primeras crisis de seguridad pública que eclosionaron en los años noventa y que en la siguiente década derivarían en el virtual estado de guerra que aún se padece en distintas entidades de la república. La sobrevivencia y mimetización de caciques rurales durante la posrevolución, hasta muy entrada la centuria pasada, sienta un precedente de la desmonopolización en el uso de la fuerza. Estos hombres fuertes que llegaban a colocarse por encima de las autoridades municipales, al grado de nombrarlas y dirigir las sin mayor impedimento que el de las formalidades legales, no sólo no han desaparecido sino que todo apunta a su fortalecimiento y adaptación al imperio de los poderes fácticos extra judiciales. Algunos han facilitado las operaciones económicas de la delincuencia organizada, cuando no se han integrado a ella.

Después de lanzada la “guerra contra el narcotráfico” a comienzos del gobierno calderonista, “empezó a ser claro que se advertía un fenómeno mucho más complejo que el de la multiplicación de bandas criminales. En principio, se trataba de la criminalización de las viejas estructuras políticas locales (gobernadores, caciques, sectores del Poder Judicial y burocracias locales, policías municipales) para hacerse del poder a través de las armas y la economía que proveían los nuevos flujos de la globalización”.<sup>67</sup> En entidades como Guerrero y Michoacán, el neocaciquismo mafioso combinó sus viejas acciones represivas con nuevos métodos para amasar cuantiosas ganancias, las cuales reforzaban su dominio territorial y permitían ampliar, por medio de la corrupción, su cartera de relaciones político-empresariales. Al descomponerse la seguridad pública y privatizarse de facto el uso de la fuerza, en un entorno de guerras mafiosas sin cuartel, las “maquinarias políticas y micropolíticas de violencia se transformaron en un breve lapso en

---

<sup>66</sup> Carlos María Perea Restrepo, *Con el diablo adentro. Pandillas, tiempo paralelo y poder*, México, Siglo XXI editores, 2007, pp. 77-78.

<sup>67</sup> Ilán Semo, “Tierra (no) prometida”, en *La Jornada*, 18 de enero de 2014, p. 16.

fulminantes fuerzas autónomas de la federación y del tejido gubernamental (por más que se nutren de él). En rigor, en muchos lugares han expropiado al Estado las fuentes mismas de su poder sustituyendo la fuerza de (la) ley por la ley de la fuerza”.<sup>68</sup>

En la interpretación de Enrique Guerra Manzo, esa conversión de las viejas estructuras políticas locales dio paso a un “neocaciquismo mafioso”. En regiones como Tierra Caliente, una zona del suroeste michoacano donde la presencia del Estado se hace sentir poco, surgieron nuevas redes delictivas y liderazgos –de origen ranchero– cuyos negocios fueron desplazando a los antiguos caciques dedicados a la agricultura; desde 1980, aproximadamente, empezó a tener auge la producción y el trasiego de enervantes, lo cual dio pie a la aparición de pequeños narcotraficantes “interesados en ganar reputación en la población, en ser aceptados y obtener prestigio”. De tal forma que, con los años, ellos ejercerían una “incipiente gubernamentalidad”.<sup>69</sup> Al principio, mucho antes de que cometieran toda clase de actos vejatorios contra la población, los narcos “eran ‘vistos como los más grandes benefactores del pueblo, en fuerte contraste con las elites antiguas e, incluso, con el Estado’”.<sup>70</sup> El siguiente paso fue la compra de políticos municipales a quienes condicionaron por medio del financiamiento de sus campañas electorales. Finalmente, a punto de concluir la primera mitad de la década anterior varios municipios michoacanos estaban infiltrados y subyugados por el hampa organizada. En los siguientes lustros, el prestigio relativo que había convertido a los capos en figuras “respetables” y “caritativas” mutó hacia el ejercicio del terror como arma de control social.

Tan pronto como creció la demanda de estupefacientes al otro lado de la frontera norte y el Estado mexicano se revelaba incapaz de prevenir y castigar la delincuencia, no tardaron en aparecer más competidores por los jugosos mercados de rentas ilícitas. Lógicamente, las pugnas entre los propios cárteles y sus franquicias llevó la violencia a escalas inconcebibles. La prensa y los medios electrónicos darían cuenta de ello, ampliando así la sensación de inseguridad. Sin embargo, el parteaguas de la barbarie fue cuando el brazo armado de un cártel tamaulipeco, que luego se escindiría de él, se alió con mafiosos locales e intentó entrar a Michoacán para arrebatárle la plaza a los capos del estado. Hasta ese momento, hablamos de 2006, la gente común no estaba entre los objetivos ni entre las fuentes de enriquecimiento de los soldados del

---

<sup>68</sup> *Idem.*

<sup>69</sup> Enrique Guerra Manzo, “Territorios violentos. Las autodefensas de Michoacán: entre paramilitarismo y neocaciquismo mafioso”, en *Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública 2019*, México, Cámara de Diputados, 2020, pp. 51-52 [texto en prensa].

<sup>70</sup> *Idem.*

narco. Pero la llegada de bandas externas cambió la situación radicalmente. La irrupción de narcoparamilitares provenientes de Tamaulipas y Coahuila, deseosos de quedarse con el puerto de Lázaro Cárdenas, presagiaba el comienzo de un conflicto armado que embona en la categoría esbozada por Metz y Kaldor: uno cuyos protagonistas son sujetos no estatales, “empresarios de la violencia”, que bregan por el control de territorios para despojarlos de sus recursos económicos. En medio de la anarquía desatada se suscitaron alternadamente: 1) acciones bélicas –como las batallas campales entre el ejército y las tropas de sicarios–; 2) actos de bandolerismo y depredaciones patrimoniales de toda índole; y 3) gravísimas violaciones de los derechos humanos, ya sea por las estrategias contrainsurgentes del gobierno federal o por los actos de terrorismo e intimidación de los criminales. En sus luchas fratricidas, los nuevos narcoinsurgentes:

[...] empezaron a aplicar tácticas de terror, veían a la población civil como un botín de guerra. Michoacán fue su laboratorio regional donde comenzaron a experimentar un modelo de expoliación que ningún cártel había practicado hasta entonces: no sólo hicieron víctima a la población civil de extorsiones, secuestros, violaciones, robos y asesinatos, sino también explotaron a todas las cadenas productivas (cobro de piso y sistema de cuotas). No escapó a su control la propia delincuencia común no organizada, la que se dedicaba al robo de autos, trata de personas, narcomenudeo y prostitución: le impusieron cobro de piso y un sistema de cuotas para permitirle sus operaciones. Por si ello fuera poco, multiplicaron los narcolaboratorios para la producción de drogas sintéticas (metanfetaminas) y ampliaron su mercado introduciéndola sin ningún escrúpulo sobre todo entre los jóvenes. Durante cinco años mantuvieron su brutal dominio sobre Michoacán, lo que no dejaba de generar malestar entre la población, algo que fue aprovechado por quienes terminarían expulsándolos de la entidad.<sup>71</sup>

La ciudadanía, al sentirse indefensa, más que acudir a las autoridades legítimas, pidió socorro a otro cártel local que si bien expulsó a los invasores terminaría sustituyéndolos y comportándose igual que éstos. El dueño de una gasolinera que acudió a ellos para que evitaran los atracos, secuestros y cobros de piso, según el testimonio que brindó, no tardó en darse cuenta que sólo había cambiado de verdugos. Los pagos que en un principio él y otros empresarios habían realizado para sacar de territorio michoacano a los narcoparamilitares nortños “se convirtieron en extorsión”.<sup>72</sup> El ascenso de estos facinerosos con poder financiero y capacidad de fuego terminó por capturar más instancias estatales. Si antes ya compraban presidentes y policías municipales, hacia 2012 –tal vez mucho antes– sus tentáculos alcanzaban la gubernatura. Hubiera

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, p. 53.

<sup>72</sup> *Ibid.*, p. 54.

sido imposible que su imperio criminal creciera sin la aquiescencia y la colaboración de políticos convertidos en alfiles de la delincuencia organizada. Ninguna estructura mafiosa conquista mercados, como si se tratara de una empresa multinacional, sin haber comprado previamente – por coacción o cooptación– los contactos empresariales, los pactos de impunidad y las herramientas logísticas para reproducir sus ganancias tanto en la economía legal como en los mercados negros.

En Tierra Caliente, los clanes del hampa michoacana literalmente impusieron una “dictadura criminal”.<sup>73</sup> De no ser por que ocupaban un cargo oficial, varios municipios y sus gabinetes, desde los jefes policiales hasta los encargados de gobierno, borraron la línea que separa a la delincuencia del gobierno. Por un lado intentaron ganarse el apoyo de las comunidades por medio de dádivas, tales como subsidios y construcción de obras públicas,<sup>74</sup> pero al mismo tiempo y en mayor medida, no dejaron de parasitar el trabajo ajeno. De hecho terminaron por “erosionar el tejido social que en el pasado les había brindado cierta protección. Su lado coercitivo-expoliador se intensificó y su lado ‘filantrópico’ se debilitó”.<sup>75</sup> Su evolución en la historia reciente de Michoacán –y de otros estados que han convivido con esta lacra– se presta para estudiar los procesos de acumulación por desposesión; los nuevos señores feudales –o neocaciques mafiosos– extrajeron rentas de todos los sectores productivos pero también de las economías familiares: cobraron impuestos extorsivos a tortillerías, hoteles, constructoras, misceláneas e incluso por organizar una fiesta o pintar una barda.<sup>76</sup> En el colmo del agravio, secuestraban hijas de familia para ultrajarlas sexualmente, cometían despojos que luego legalizaban por medio de notarios o, a plena luz del día, ametrallaban a quienes se organizaban para resistir abiertamente sus depredaciones.<sup>77</sup>

---

<sup>73</sup> El término fue acuñado por Eduardo Guerrero Gutiérrez para describir el gobierno de facto que la criminalidad organizada impuso en esa región de Michoacán. Naturalmente, la situación no es privativa del Occidente y el Sur-Sureste; este azote se repite en otras entidades gobernadas por el neocaciquismo mafioso. La narrativa sobre la democratización del sistema político después del 2000 encuentra en la captura del Estado mexicano a manos de la delincuencia un severo cuestionamiento que ameritaría la revisión de dicho discurso. Eduardo Guerrero Gutiérrez, “La dictadura criminal”, en *Nexos*, núm. 436, abril 2014, pp. 44-52.

<sup>74</sup> Su poderío fue tal que por algunos años sustituyeron al Estado hasta en la administración de justicia. Llegaron a desarrollar “un sistema cuasijudicial paralelo al del Estado, castigando diversas transgresiones: robos, secuestros no autorizados, infracciones de tránsito, entre otras cosas. Aparte de regular la esfera pública, trataron de mediar en la esfera privada: en conflictos familiares, divorcios, herencias, castigar agresiones a la mujer”. Guerra, *op. cit.*, p. 56.

<sup>75</sup> *Ibid.*, p. 57.

<sup>76</sup> *Idem.*

<sup>77</sup> Denise Maerker, “Auxilio, ¿dónde está el Estado?”, en *Nexos*, núm. 436, abril 2014, p. 26.



Sus principales víctimas fueron ganaderos y cultivadores de limón, mango y aguacate, productos altamente demandados por el mercado externo; sobre ellos pesaron más las exigencias y los abusos del crimen. Por cada tonelada vendida les cobraban un importe que mermaba sus negocios. Incluso fijaban la producción y decretaban cuánto podían recolectar y vender.<sup>78</sup> El empleado de un finquero que ganaba 3 mil pesos a la semana por transportar las cosechas vio reducido su jornal a la mitad cuando los mensajeros de las bandas desvalijaban a su patrón y éste, sin más opción, tenía que recargar las cuotas solicitadas sobre el salario de sus empleados. Estos últimos, con menos dinero en el bolsillo, tampoco evitaron las extorsiones cuando los maleantes llegaban hasta sus domicilios para cobrarles por cada cuarto construido en el terreno que habitaban.<sup>79</sup>

Las lujosas mansiones de los capos contrastaban con las modestas viviendas de los trabajadores rurales o aún con las fincas de los productores limoneros; literalmente estaban explotando la fuerza laboral, los capitales fijos de la agroindustria local, los pequeños negocios y la infraestructura pública para beneficio propio. Los ingresos obtenidos más allá del tráfico de drogas los identifican como empresarios de la violencia que, por la fuerza de las armas y la inexistencia de un sistema judicial funcional, logran sangrar, sin distinción de clases, a todos los eslabones dentro y fuera de la economía formal. Como es sabido, este cúmulo de perjuicios y arbitrariedades ilimitadas abrió las esclusas de una furibunda respuesta popular –un estallido social– que prescindió del Estado. La población tomó las armas y se coordinó para hacerse justicia, defender su patrimonio y mantener a raya a los responsables de lo que puede calificarse como el periodo más adverso en la historia del pueblo michoacano.

La presencia de sus operadores financieros y emisarios comerciales en los cinco continentes acredita a estas organizaciones como agentes globales. En el cénit de su dictadura sobre vastas regiones de Michoacán los mafiosos controlaron el puerto de Lázaro Cárdenas, un valioso punto de apoyo que los conectaba con la cuenca del Pacífico. No sólo utilizaron esta base portuaria para recibir los precursores químicos que sirven en la fabricación de drogas sintéticas, las cuales transportaban y vendían posteriormente en Estados Unidos; asimismo incursionaron en la minería ilegal, otro de sus negocios de mayor valía. A raíz del alzamiento de las autodefensas y la atención mediática que produjo, la opinión pública mexicana fue enterándose detalladamente

---

<sup>78</sup> *Idem.*

<sup>79</sup> Alejandro Sánchez, “Yo, autodefensa. Así expulsamos a Los Templarios”, en *Emmeequis*, núm. 320, 27 de enero de 2014, p. 38.

de todas las fuentes de ingreso que les habían permitido mantener una nómina que incluía a funcionarios públicos de distintos niveles y procedencias institucionales. A principios de 2014, en las cercanías de Lázaro Cárdenas fueron incautadas varias piezas de maquinaria pesada que servían para extraer el hierro que embarcaban y luego vendían en China. No conformes con explotar ellos mismos las betas del mineral ferroso, “obligaban a los mineros empleados en empresas legales a entregarles una porción” de lo que lograban sacar durante su jornada. Por tratarse de una actividad que no declaraba impuestos, se calcula que sus utilidades rondaban los 28 millones de dólares por año. Hasta 2013 la ciudad portuaria estuvo tomada por este sindicato del hampa que, no conforme con explotar las betas aledañas al municipio, también extorsionaba a los negocios locales y las empresas que ahí operaban. El descontrol fue tal que las Fuerzas Navales desplazaron a la marina mercante en el cumplimiento de sus tareas; los uniformados asumieron funciones civiles.<sup>80</sup>

Si en Lázaro Cárdenas los bandidos saqueaban el hierro o exprimían a las compañías que lo comercializaban, en Cherán, un municipio boscoso enclavado en la Meseta Purépecha, se atrevían a robar la riqueza maderera de las comunidades. En su afán rentista, los talamontes aceleraron la destrucción del patrimonio natural de los cheranenses<sup>81</sup> y éstos, al sentirse indefensos y reclamar que las autoridades no hacían nada al respecto, decidieron organizarse para tomar las armas y defender los bosques. Cuando la guerra contra el narcotráfico expandía la metástasis de violencia y desgobierno, los propietarios de negocios y tiendas en el centro de la localidad recibieron amenazas para que pagaran derecho de piso; luego vino una oleada de plagios para pedir rescate.<sup>82</sup>

Por si estos infortunios no eran suficiente razón para atemorizar a los habitantes, los agresores encontraron en los recursos forestales una mina de oro. Si bien la tala ilegal en la zona es un problema de larga data, la llegada de agrupaciones delictivas la agudizó; los leñadores foráneos o quienes ya se dedicaban a depredar los bosques fueron contratados por dichas mafias. La magnitud del pillaje, que manifestaba una crisis ecológica local, “incrementó exponencialmente hasta llegar a los 200 camiones diarios cargados de madera en rollo. En toda la

---

<sup>80</sup> *El País*, 8 de marzo de 2014, [https://elpais.com/internacional/2014/03/08/actualidad/1394313114\\_394510.html](https://elpais.com/internacional/2014/03/08/actualidad/1394313114_394510.html).

<sup>81</sup> A principios de esta década la región de la meseta purépecha había “perdido más de 60% de su arbolado, y en esta zona como en Charapan, Paracho, Nahuatzen, Zacán y Uruapan”, existían “más de 2 mil 500 talleres de madera clandestinos, según la Comisión Estatal Forestal”. *La Jornada*, 16 de abril de 2011, p. 28.

<sup>82</sup> Giovanna Gasparello, “Análisis del conflicto y de la violencia en Cherán, Michoacán”, en *Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad*, núm. 155, verano 2018, pp. 81-83.

Meseta, la explotación irracional” se desarrolló “con el cobijo y la anuencia de autoridades locales y federales corrompidas o amenazadas, cómplices o víctimas de la violencia estructural que encarna el extractivismo en su faceta criminal”.<sup>83</sup> En 2009 la criminalidad se cobró la vida de 15 comuneros y desapareció a otros seis. Hasta 2012 la violencia siguió *in crescendo*. Durante algún tiempo, a partir de las siete de la noche las calles de Cherán se encontraban vacías mientras los delincuentes se paseaban armados y sus vehículos de carga saqueaban los bosques.<sup>84</sup>

Un poco antes del surgimiento de las autodefensas en Tierra Caliente, los pobladores de la mencionada localidad, cansados de tantos vejámenes, asesinatos y la fractura de su vida en comunidad, decidieron prescindir de los canales formalmente establecidos para dotarse de seguridad y defender sus recursos naturales. Dada la inoperancia de la policía municipal, en 2011 formaron rondas comunitarias y dos años después clausuraron “la oficina de la Procuraduría General de Justicia del Estado con sede en Cherán, frente a la ausencia de resultados en la investigación del asesinato de siete comuneros y la acusación de colusión con las redes criminales”.<sup>85</sup> Estos hechos, junto con otros igual de graves que estaban suscitándose en los estados del norte o en Veracruz, estado de la república que también registró cifras alarmantes de muertos, desaparecidos y daños patrimoniales, evidenciaba algo muy parecido a un conflicto armado que no sólo englobaba una crisis de seguridad pública: involucraba células delictivas paramilitarizadas, civiles en armas y autoridades rebasadas por la violencia.

## Consideraciones finales

La feudalización del poder en el mundo contemporáneo camina al compás de la pérdida del control territorial que, en teoría, recae en los gobiernos. A partir de los ejercicios imaginativos de Vacca, Eco, Sacristán de Lama, Colombo y Attali, que vacilan entre la sociología prospectiva y la ciencia ficción, además de las ideas de los otros autores expuestos, es posible preguntarnos si el concepto sobre el monopolio de la fuerza seguirá siendo válido para hablar sobre las condiciones sociopolíticas que aguarda el futuro. La demanda global por los recursos, así como los predecibles desajustes globales que presagia el cambio climático, será motivo de pugnas en las que no será difícil que, verosímelmente, participen actores no estatales. La participación de

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, p. 89.

<sup>84</sup> *Ibid.*, p. 82.

<sup>85</sup> *Ibid.*, p. 87.

grupos armados por la venta internacional del crudo en Nigeria, el saqueo de las reservas auríferas en Venezuela o el crecimiento de la minería y la tala ilegal en México, Colombia, Perú y Brasil, por mencionar algunos ejemplos, dan cuenta de ello.

En la actualidad la referida categoría enunciada por Max Weber en su texto *La política como vocación* ha sido seriamente cuestionada por la proliferación de fuerzas paraestatales que sin contar con legitimidad política alguna, han sido capaces de erigirse como actores económicos y fuerzas beligerantes –no siempre reconocidas– que poseen los recursos humanos, las posibilidades financieras y los medios tácticos para sembrar ingobernabilidad, alterar las economías regionales en beneficio propio, corromper el tejido social y capturar instituciones del Estado. La feudalización del poder, entendiéndola como la fragmentación de soberanías y la pérdida de control territorial por parte de los gobiernos, desde hace algún tiempo ya es una realidad que politólogos e internacionalistas observan en varios países periféricos. La puja por los activos naturales –y no sólo el tráfico de drogas, armas y personas– también alienta las operaciones de redes delictivas que, sabiendo aprovechar las ventajas de la globalización, acumulan poder económico y llenan los vacíos que dejan los Estados.

El panorama internacional que siguió al fin de la Guerra Fría, por un entramado diverso y complejo de factores, legó problemas que no tardaron en ser motivo de conflictos regionales y nacionales. Los Balcanes y la situación interna de Rusia y las antiguas repúblicas soviéticas ilustran esos adeudos que hibernaron largos años y que, en medio de un acelerado proceso de cambios económicos y geopolíticos, implosionaron socialmente y, en consecuencia, potenciaron inestabilidad política. Sin hablar de las guerras interétnicas o los brotes de separatismo que sellaron el fin del milenio en distintos puntos del mapa, uno de los hechos que siguen teniendo plena vigencia y que reflejan la debilidad crónica de muchos Estados es el empoderamiento inédito de la delincuencia organizada. El tránsito abrupto de una economía cerrada a otra abierta, sin la presencia de las instituciones adecuadas que gradúen, regulen y administren esas transformaciones estructurales que de suyo conllevan costos económicos y sociales, contribuyó al crecimiento de mafias y células criminales que parasitan los sectores productivos y al mismo tiempo minan el funcionamiento de la seguridad pública y la impartición de justicia.

La Federación Rusa en los primeros lustros de su existencia es uno de los ejemplos más crueles en los que la claudicación del Estado en distintos campos estimuló el crecimiento de los mercados negros en casi todas las áreas de la vida económica. La competencia por el acceso o la

permanencia en los mismos no fue reflejo de la innovación, la creatividad productiva o las aptitudes para ofrecer mejores bienes y servicios sino el resultado directo de las alianzas entre facciones que recurrían a la violencia extrema, el chantaje, el sicariato, las influencias políticas o la corrupción más burda. La globalización de la economía es también la globalización del delito y ésta, sumada a los contextos propios de cada país, sobre todo cuando existen hondos vacíos de poder, estimula las condiciones para nuevos conflictos y la aparición de nuevos señores feudales.

En América Latina, por sus propias anomalías, como sistemas judiciales disfuncionales y persistentes prácticas de corrupción, hemos atestiguado la formación de poderes que funcionan paralelamente a los oficiales. Su inserción en las redes de la economía y el comercio global, tanto con negocios legales como aquellos que no lo son, multiplica sus posibilidades financieras para mantener un *statu quo* afín a sus intereses: es decir, autoridades corrompibles y aparatos de seguridad dispuestos a trabajar para ellos.<sup>86</sup> El narcotráfico es el principal pero no el único de ellos. Existen otros rubros que generan cuantiosas rentas y que también abonan a la violencia homicida, cuyos saldos son equiparables a los de una guerra civil. Los decesos violentos en la región la convierten en la más insegura y peligrosa pues equivalen a un conflicto bélico no declarado. Solamente en 2017, de acuerdo con un estudio de la ONU fueron cometidos 173,000.<sup>87</sup>

Por otra parte, el robo de combustibles en México o las actividades extractivas ilícitas en Venezuela, además de desdibujar el peso de las autoridades, ejercen presión sobre el uso racional, sostenible y medido de los recursos naturales. Todo indica que el hampa organizada ya empieza a incursionar en la explotación y venta de éstos, con las pérdidas fiscales que esa competencia ilegal significa para los Estados y sus sistemas recaudatorios. Los jóvenes delincuentes que se unen a estructuras mafiosas con una presencia extendida sobre un territorio o que pertenecen a una banda local, alimentan un sistema alterno que ofrece ingresos monetarios y opciones de vida que la economía formal o el sistema escolar no logran proporcionarles satisfactoriamente; la formación de esta soldadesca sin más consciencia de clase que la pertenencia a un clan delictivo nos recuerda a los ejércitos pirata que imaginó Attali y que, en realidad, ya existen en algunos países africanos donde la lucha armada por las materias primas, la anarquía en forma de pleitos étnicos, el pillaje y las violaciones de derechos humanos los convierten en Estados fallidos o algo parecido.

---

<sup>86</sup> Sonia Alda Mejías, “Estado y crimen organizado en América Latina: posibles relaciones y complicidades”, en *Política y Estrategia*, núm. 124, julio-diciembre 2014, p. 75.

<sup>87</sup> *Global Study on Homicide. Executive Summary*, Viena, UNODC, 2019, p. 11.

Naturalmente, la situación en este lado del Atlántico no es comparable con la de varias repúblicas centroafricanas. Sin embargo, la irrupción de organizaciones delictivas compuestas por pequeñas células que viven de diferentes actividades y que exhiben un control territorial que ni siquiera detenta el Estado, nos obliga a preguntarnos si no estamos frente a una clase social emergente que vive en los bordes de la ley. Si durante la era industrial se hablaba del lumpenproletariado como una categoría marginal, entre las desigualdades que produjeron las transformaciones estructurales de los últimos decenios encontramos una masa flotante de trabajadores que se integraron en los espacios de la economía informal, otros que se ganan la vida en empleos precarizados y unos más que sobreviven como eslabones de una agrupación delictiva –independientemente de su tamaño– o bien protagonizan por cuenta propia robos, asaltos, estafas o cualquier conducta antisocial que les registre un beneficio. La feudalización del poder en Latinoamérica, entonces, también se explica por una base social lumpenizada que, por necesidad o decisión propia, facilita sus operaciones.

En comparación con Centro y Sudamérica, el empoderamiento del crimen organizado como poder fáctico no legal, lo que regionalmente Guerra Manzo llama neocaciquismo mafioso, se relaciona con una transición política inacabada en la cual el dinero sucio de intereses oscuros no permite que ésta llegue a buen puerto. La fractura del poder en México debe entenderse a partir de la captura de sus instituciones estatales. Como apunta Edgardo Buscaglia, un experto en combate a la delincuencia organizada, la convivencia entre capos, dirigentes políticos y empresarios, atora el desarrollo “de las instituciones políticas y transforma a los procesos electorales convirtiéndolos en una simulación democrática, siendo así que delincuentes organizados pueden transformarse en políticos de la noche a la mañana”.<sup>88</sup> La simbiosis entre mafia, política y negocios comprueba, visiblemente, dos situaciones: 1) la apropiación de bienes, patrimonios y servicios públicos en provecho de dichas estructuras criminalizadas; y 2) la alteración de las obligaciones –y la naturaleza misma– del Estado mexicano.

Esta metamorfosis es perceptible, en primer lugar, a nivel municipal. Entre 2007 y 2014 Michoacán se feudalizó. Para que haya tenido lugar una dictadura patibularia en Tierra Caliente no costará mucho trabajo imaginar a quiénes respondían las autoridades municipales. Ahí se comprueba una falencia de la transición política mexicana por su carencia de controles judiciales, los cuales, de haber sido desarrollados e implementados desde los primeros años de la

---

<sup>88</sup> Edgardo Buscaglia, *Lavado de dinero y corrupción política*, México, Debate, 2015, p. 24.

alternancia, hubieran ayudado a construir un sistema capaz de articular los esfuerzos de las policías, las fiscalías, los juzgados y los sistemas penitenciarios.<sup>89</sup> En segundo término, la pérdida de soberanía por parte del Estado implicó que la vida y la propiedad de los michoacanos quedaran bajo el dominio de la delincuencia; sus jefes, sicarios y operadores, además de seguir administrando la producción y venta de drogas, ampliaron sus rentas sangrando a la sociedad – principalmente con extorsiones– y despojándola de sus activos naturales. En el caso de Cherán, “la explotación irracional acontece con el cobijo y la anuencia de autoridades locales y federales corrompidas o amenazadas, cómplices o víctimas de la violencia estructural que encarna el extractivismo en su faceta criminal”.<sup>90</sup>

Michoacán no fue el único estado que sufrió toda clase de calamidades. A diferencia de otras entidades petrificadas de miedo por la delincuencia, trátase de aquella que se coordina para parasitar la riqueza que produce una sociedad o la que se padece cotidianamente en las calles, los habitantes de esa región tomaron las armas para expulsar de sus pueblos un azote que desposeía localmente a los empresarios agrícolas, los pequeños propietarios y las comunidades indígenas. Considerando las diferencias contextuales que separan a México de los estados fallidos africanos, lo que ocurrió en esta entidad federativa, como ya apuntamos, ratifica las características de las insurgencias criminales que se confrontan entre ellas o con fuerzas regulares del gobierno por el control de los recursos económicos.

Si pensamos en los acontecimientos que estimativamente ocurrirán en los próximos lustros, empezando por los riesgos globales que acompañan al cambio climático, por no hablar de los desórdenes y desplazamientos masivos de población ante la carencia de agua, alimentos y energía, elementos crecientemente demandados por los grandes asentamientos urbanos, no es equivocado presuponer que el crimen organizado obtendría mayores oportunidades para lucrar con las necesidades humanas en un contexto de crisis generalizada. Las pujas por los recursos estarán a la orden del día y la ingobernabilidad en sus múltiples formas desataría toda clase de comportamientos anómicos y tendencias hacia la disgregación social. En el caso particular de México y Centroamérica, en un análisis elaborado por el Royal United Services Institute, un *think tank* del gobierno británico, se advierte que las instituciones del país podrían enfrentar “graves problemas de seguridad e inestabilidad [...] por la escasez, la sequía, las inundaciones y las

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, p. 26.

<sup>90</sup> Gasparello, *op. cit.*, p. 90.

oleadas de migrantes por razones climáticas”. Hace una década, los autores del citado informe puntualizaron cuatro desafíos de colosal importancia que aguarda esta coyuntura y que no serán nada fáciles de administrar: 1) la competencia por los recursos naturales; 2) una mayor frecuencia y poder de destrucción de eventos climatológicos; 3) la exacerbación de movimientos migratorios generados por causas relacionadas con el medio ambiente; y 4) mayor presencia y capacidad de grupos del crimen organizado.<sup>91</sup>

Si actualmente uno de los negocios más lucrativos de estos actores no estatales de carácter ilegal es el robo de combustibles, no resulta improbable que en un futuro cometan latrocinios sobre las fuentes de agua y las reservas de alimentos, las cuales acabarían en el mercado negro. Las condiciones imperantes podrían favorecer sus actividades y, visto desde esa perspectiva, tendrían un mayor número de reservistas que prestarían sus servicios a cambio de una oportunidad para hacerse de un ingreso. Hacia 2030, si no han sido cumplidos los esfuerzos internacionales para enfrentar y adaptarse exitosamente al cambio climático, una crisis de tales magnitudes aumentaría las posibilidades rentísticas de la delincuencia, no sólo a nivel nacional sino regional; si ésta no es reducida al mínimo en los próximos años –o cuando menos atenuada de forma significativa–, las propias condiciones que se desprendan de las sequías, las inundaciones y cuantos siniestros naturales se susciten, crearían el caldo de cultivo para un crecimiento exponencial del delito y la violencia social. La feudalización del poder y la fractura de territorios por la puja de recursos estratégicos sugieren un porvenir poco alentador. Por ello, la urgente modernización de nuestras instituciones para que sean capaces de administrar los riesgos globales demanda que la inseguridad no se empalme ni entremezcle con otras problemáticas que también amenazan la gobernabilidad del país.

La pérdida de control jurisdiccional sobre territorios dominados por entidades igual de poderosas que los gobiernos ya es una realidad en distintas partes del globo terráqueo. Acaso un presagio de una tendencia geopolítica que podría aumentar en aquellos países con una infraestructura institucional débil. Si sumamos las dificultades que no escatimará el cambio climático, el panorama se torna desalentador. Sin embargo, el futuro no está escrito. A pesar de los pronósticos adversos y las realidades actuales que así los proyectan, la cooperación internacional, el compromiso entre gobiernos y sociedad civil y, por qué no decirlo, los esfuerzos individuales del ciudadano común pueden cambiar el presente para construir algo mejor.

---

<sup>91</sup> *La Jornada*, 14 de octubre de 2010, p. 45.



# CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA

[www.diputados.gob.mx/cesop](http://www.diputados.gob.mx/cesop)

 cesop01

 @cesopmx